



Periódico Oficial



ORGANO DE DIFUSION OFICIAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

SECRETARIA DE GOBIERNO

Franqueo pagado, publicación periódica. Permiso núm. 005 1021
características: 114182816. Autorizado por SEPOMEX

Tomo III Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Viernes 28 de Diciembre de 2007 No. 071

INDICE

Publicaciones Estatales:		Página
Decreto No. 106	Por el que se aprueban los Programas Sectoriales de Infraestructura y Comunicaciones, Educación, Gobierno, Salud, Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo Social y Fomento Económico, Turístico y de Proyectos Estratégicos 2007-2012.....	3
Decreto No. 107	Por el que se reforma el Artículo 45, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.	13
Decreto No. 108	Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.	15
Decreto No. 109	Ley Orgánica del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas.	72
Decreto No. 110	Por el que se reforman y adicionan la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2008, el Decreto que Contiene Bases, Coeficientes y Plazos para el Pago de Participaciones Fiscales Federales a los Municipios del Estado de Chiapas, para el Ejercicio Fiscal 2008, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, la Ley Estatal de Derechos, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Hacienda Municipal.	82

Decreto No. 111

Por el que se Autoriza al Ejecutivo del Estado, la constitución de un Fideicomiso Público que tendrá por un objeto la Promoción y Fomento Integral de la Vivienda.

98

Publicaciones Estatales:

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 106

Juan Sabinés Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 106

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

C o n s i d e r a n d o

Que con fundamento en el artículo 29 fracción V de la Constitución Política del Estado de Chiapas y 1 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta Soberanía Popular se encuentra facultada para formular, y en su caso, aprobar los Planes globales y sectoriales para el desarrollo del Estado.

Que en atención a lo dispuesto por los artículos 18, y 19 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, es facultad del Ejecutivo del Estado elaborar Los Programas Sectoriales de Infraestructura y Comunicaciones, Educación, Gobierno, Salud, Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo Social y Fomento Económico, Turístico y de Proyectos Estratégicos 2007-2012 y remitirlo al H. Congreso del Estado para su glosa, análisis y aprobación en su caso.

Que de acuerdo al contenido del artículo 9 del citado ordenamiento legal, se entiende por planeación, al conjunto ordenado, racional y permanente de acciones destinadas a formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas que de ella se deriven, optimizando el uso de los recursos y con ello alcanzar mejores niveles de vida para la sociedad. La planeación se instrumentará a través de planes y programas, mismos que señalarán las prioridades a atender, los objetivos y metas a alcanzar y las estrategias a seguir; así como los recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución y evaluación de resultados.

Que en junio de 2007 fue aprobado el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, en el cual se exponen las políticas públicas que habrán de guiarnos para hacer frente a los principales retos en materia económica ante un mundo globalizado, resolver los problemas de tipo social y político más urgentes y, en especial, impulsar y fortalecer la infraestructura que sustente el desarrollo productivo y social de la entidad en el mediano y largo plazo. En el marco de estas políticas que habrán de dar rumbo al desarrollo de la entidad, se presentaron los Programas Sectoriales de Infraestructura y Comunicaciones, Educación, Gobierno, Salud, Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo Social y Fomento Económico, Turístico y de Proyectos Estratégicos 2007-2012.

Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones 2007 – 2012.

El Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones que se presentó a los chiapanecos establece los objetivos, estrategias, proyectos y metas que nos permitirán ampliar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura social y productiva de la entidad.

Este programa se deriva del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 – 2012 y es el documento rector para el impulso de la infraestructura que será la base que permita elevar el crecimiento económico con un enfoque regional sustentable, propiciar la generación de más empleos y alcanzar el desarrollo humano sustentable al que aspiran todos los chiapanecos. El programa incluye los rubros de Infraestructura de autotransportes, carretera, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria y telecomunicaciones; vivienda, desarrollo urbano y mejoramiento integral de poblados; así como el de Infraestructura social básica relacionada con electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento.

Cuya importancia estriba en que será el instrumento rector que guíe la generación de la infraestructura necesaria, acorde a las políticas de desarrollo económico, social y humano, y a las potencialidades de desarrollo de cada una de las regiones del estado, asume que el crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de la sociedad sólo serán alcanzados si se cuenta con una infraestructura a la altura de los retos de este gobierno para hacer de Chiapas un estado más competitivo.

El Programa está dividido en cuatro apartados, en los cuales se abordan cada uno de los rubros de infraestructura:

Diagnóstico. En el que se describe la situación actual del sector infraestructura y su posición en el contexto nacional a partir del análisis de indicadores nacionales.

Visión de largo plazo. En la que se plantean los objetivos, estrategias y metas sectoriales.

Visión sectorial. Esta contiene los indicadores que nos muestran la situación inicial de la infraestructura en la entidad, los objetivos y estrategias previstos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 – 2012 con los que se alinean cada una de las acciones que se proponen, los principales proyectos, las metas específicas y la inversión estimada a realizar por los organismos públicos del sector durante los seis años para cada uno de los rubros de infraestructura.

Requerimientos de inversión. En el que se exponen los montos de recursos necesarios para dar cumplimiento a las metas del sector.

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, considera a la educación como elemento fundamental para el desarrollo y vía por excelencia, de movilidad social. Asimismo se establece que el Estado y la sociedad han de promover una educación de calidad que forme parte del ejercicio de la libertad y la convivencia democrática, con el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos, experiencias y valores. Orientándose a fortalecer la escuela pública con las mayores responsabilidades del Estado y de los Municipios en la acción educativa.

Este programa se deriva del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y será el documento rector para el impulso de la educación que será la base que permita orientar los rumbos y la intervención pedagógica para construir la educación a la que aspiramos los chiapanecos con metas al 2012, de un sistema educativo amplio, equitativo, flexible, dinámico, diverso y articulado.

El programa incluye los rubros de: Chiapas Solidario por la Alfabetización, Todos a la Escuela, Educación Básica Formal, Educación Básica Indígena, Educación Media, Educación Superior, Infraestructura Física Educativa, Cultura y Regionalismo y Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Programa plantea la necesidad de consolidar un auténtico sistema estatal de educación que articule armónicamente desde la educación inicial hasta la educación superior, fundamentado en la experiencia acumulada de generaciones pasadas y presentes, con el propósito firme de impulsar la innovación. Así mismo, se pretende desarrollar una educación incluyente que ofrezca mejores oportunidades educativas a los que menos tienen, que garantice la calidad de los servicios, que fortalezca en los educandos sus valores y principios y que respete la identidad cultural, especialmente la de los pueblos indígenas. Procurando dotar a los chiapanecos de conocimientos útiles a fin de facilitarles el logro de sus aspiraciones que se plantean como individuos y como miembros de la sociedad.

Uno de los grandes retos planteados en este Programa es ofrecer una educación fincada en los principios de equidad, eficiencia, pertinencia y cobertura, para así lograr con franqueza la calidad en el sistema educativo.

La atención a la población en desventaja especialmente a la indígena y a la de las zonas con alta marginación, es prioridad del Gobierno. Para ello, se orientarán medidas específicas para incrementar sus oportunidades de acceso a la escuela mediante el fortalecimiento y ampliación de programas compensatorios.

Con el objeto de impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación, se reforzará la formación inicial de los maestros y la actualización permanente de los docentes en servicio; así como de manera concertada, reubicar a los docentes para hacer uso óptimo de sus servicios en toda la geografía chiapaneca, ya que su desempeño incide directamente en este propósito fundamental.

Se fomenta una genuina cultura de la evaluación educativa, en donde participen todos los agentes directamente involucrados en el hecho educativo (alumnos, maestros, padres de familia, autoridades educativas y autoridades comunitarias).

De igual forma, nuestro estado se distingue por su enorme riqueza cultural, que se expresa de manera natural a través de sus danzas, gastronomía, música y demás artes regionales; por lo que se fortalecerá la participación ciudadana, la formación de públicos y la profesionalización de los promotores y gestores culturales.

Reconociendo la importancia que representa la ciencia, la tecnología y la innovación estrechamente vinculadas a la educación como oportunidad para el desarrollo del estado, es necesario impulsar la formación de profesionales de investigadores en los diferentes campos de la ciencia y tecnología.

El Programa Sectorial impulsa una agenda educativa focalizando los siguientes aspectos: Pertinencia educativa y cambio social, educación y desarrollo económico, educación y sustentabilidad del ambiente, educación y derechos humanos, educación y diversidad cultural, educación e identidad nacional y educación y democracia.

Estos temas fundamentales hacen referencia a la calidad de los procesos y los servicios educativos, de ahí que considere la educación de calidad para todos, como la obligación de propiciar condiciones de plena igualdad educativa y de acceso al conocimiento, donde todas y todos puedan sentirse respetados y ser respetuosos, capaces de acrecentar su disposición a convivir en el constante cambio, nutrirse de la diversidad, compartir y dialogar, sobre la base del respeto, la tolerancia y la convivencia solidaria.

El programa está dividido en cuatro apartados en los cuales, se abordan cada uno de los rubros de educación:

Diagnóstico. En el que se describe la situación actual del sector educativo y su posición en el contexto nacional a partir de análisis de indicadores nacionales.

Visión de largo plazo. Se plantean los objetivos, estrategias y metas sectoriales del programa.

Visión sectorial. Contiene los indicadores que nos muestran la situación inicial de la educación en la entidad, los objetivos y estrategias previstos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 con los que se alinean cada una de las acciones que se proponen los principales proyectos, las metas específicas y la inversión estimada a realizar por las dependencias e instituciones del sector y organismos durante los seis años para cada uno de los rubros de educación.

Requerimiento de inversión. Se exponen los montos de recursos necesarios para dar cumplimiento a las metas del sector.

El Programa Sectorial de Gobierno 2007-2012.

El Programa del Sector Gobierno, plantea dar pasos decisivos para hacer de Chiapas un estado más seguro, con un mínimo de rezago social, con estabilidad política, con mejores servicios hacia la comunidad y por lo que se trabaja incansablemente para ofrecer esas condiciones de seguridad que permitan que en Chiapas exista mayor inversión e industrias, mayor turismo, más fuentes de empleo, mejor educación y desarrollo.

De esta forma, las acciones de este gobierno van encausadas a fomentar el bienestar de la población, incidiendo específicamente en la modernización de los servicios prestados, la gobernabilidad democrática, la política interior, la seguridad pública e impartición de justicia, la prevención y protección de los ciudadanos en casos de contingencia.

El Sector Gobierno, vinculado en esa dinámica social, es consciente de que la sociedad actual ha forjado madurez y conciencia política, en el que la participación de los distintos sectores que componen al tejido social se organiza para demandar derechos y beneficios. En este sentido, el gobierno del estado ha privilegiado en todo momento el diálogo y la concertación como los mejores caminos para la solución

de los problemas y con ellos alcanzar la gobernabilidad esperada, y en consecuencia, mejores niveles de vida y desarrollo en nuestras localidades.

El trabajo del Sector Gobierno, se reflejará cuando se le dé cumplimiento a los objetivos y metas trazados en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, que tiene como acciones principales las de impulsar reformas que impacten en el ámbito constitucional administrativo, social y económico, para alcanzar el desarrollo armónico de la sociedad, fortalecer la actividad municipal y estatal en la prestación de servicios públicos, fomentar y consolidar una cultura de respeto a los derechos fundamentales de los chiapanecos, proponer las reformas jurídicas necesarias para combatir la violencia en el estado, reformar el marco jurídico civil y penal de acuerdo a las necesidades de la población, desarrollar entre los diversos actores sociales la adecuación de su conducta a las disposiciones legales que rigen la estructura política, económica, social y cultural en Chiapas y facilitar la comprensión y aplicación del contenido de la normatividad vigente en el estado, con la finalidad de garantizar la atención de las necesidades colectivas de la sociedad chiapaneca, desde una óptica garantista que tiene como premisa el respeto a la legalidad y al orden jurídico.

Así mismo la acción gubernamental está orientada a cambios medulares, mediante la implementación de proyectos de las dependencias que componen a este sector. Se trata pues, de abatir el rezago en aspectos de seguridad, tenencia de la tierra, controversias sociales y de servicios a la sociedad, buscando llevar a Chiapas a los primeros lugares a nivel nacional.

Que uno de los principios fundamentales del estado de derecho es la legalidad, ésta no debe explicarse por la sola existencia de ordenamientos legales aplicables a un individuo. Chiapas no es la excepción y su tradición cultural no permite ignorar los cambios que el orden nacional e internacional experimenta.

Dentro del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 – 2012, ha sido considerada como política pública fundamental el desarrollo de una Cultura de la Legalidad, con el objeto que los actos de gobierno estén claramente fundamentados en la norma jurídica, misma que debe ser cabalmente acatada por los servidores públicos y asimismo, conocida por los chiapanecos, con ello, se dará certeza jurídica no solo a los actos gubernamentales sino en general, al desarrollo de la vida en Chiapas.

Enfrentar con decisión el reto de alcanzar los niveles de seguridad que los ciudadanos demandan, exigen la estricta aplicación de la Ley, la capacidad y honradez de las instituciones y servidores públicos, así como la participación de la sociedad como elemento fundamental en las decisiones y acciones del gobierno en esta materia. Así mismo se hace necesario consolidar el Sistema Estatal de Protección Civil, priorizando su aspecto preventivo, incrementando su capacidad de respuesta a nivel regional y municipal, y promoviendo una cultura de auto protección a la ciudadanía.

Se busca una sociedad armónica y en paz, como condición para un mayor y permanente crecimiento. Se ha respetado la pluralidad y la diversidad de ideas y cultura. Se ha escuchado la voz del pueblo, con sensibilidad, se atendieron sus justos reclamos.

El Programa está dividido en cuatro apartados, en los cuales se abordan cada uno de los rubros de Gobierno:

Diagnóstico. En el que se describe la situación actual del Gobierno y su posición en el contexto nacional a partir del análisis de indicadores nacionales.

Visión de largo plazo. Se plantean los objetivos, estrategias y metas sectoriales del programa.

Visión sectorial. Contiene los indicadores que nos muestran la situación inicial en la entidad, los objetivos y estrategias previstos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 con los que se alinean cada una de las acciones que se proponen, los principales proyectos, las metas específicas y la inversión estimada a realizar por los organismos públicos del sector durante los seis años para cada uno de los rubros de salud.

Requerimientos de inversión. Se exponen los montos de recursos necesarios para dar cumplimiento a las metas del sector.

Programa Sectorial de Salud 2007-2012.

Este Programa se deriva del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, y es el documento rector para el impulso de mejorar y consolidar los servicios de salud, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud teniendo como propósito mejorar la calidad y expectativa de vida de la población chiapaneca a través de la cooperación intersectorial y social.

El Programa Sectorial de Salud establece los objetivos, estrategias, proyectos y metas que nos permitirán ampliar la cobertura, calidad y competitividad de los servicios de salud en la entidad.

La salud de los chiapanecos es el resultado de la interrelación de un conjunto de variables demográficas, factores ambientales, infraestructura, aspectos sociales, culturales y económicos que han determinado el patrón epidemiológico de Chiapas.

El nuevo quehacer en salud ha reconocido la importancia de incorporar el medio ambiente y los estilos de vida como determinantes de la salud y define como nuevas tareas: la reorientación de las acciones sanitarias hacia la promoción y educación en salud, la prevención de las enfermedades y la investigación; por otra parte los grandes problemas en cuanto a la efectividad, eficiencia y equidad de los servicios obligan a reorientar o reemplazar los métodos de administración y gestión, en busca de políticas de salud adecuadas a los grupos poblacionales y a los verdaderos riesgos de enfermar y morir, sin dejar de lado los factores causales de los mismos riesgos y daños.

La atención a la salud es considerada prioritaria en el contexto de la política social del gobierno constitucional 2006-2012 del estado de Chiapas; la oferta en salud que identifica y determina la factibilidad técnico-financiera está dada por las instituciones adscritas o vinculadas al Sector Salud del estado de Chiapas.

Todas las acciones que se realicen tendrán como premisas de trabajo: la incorporación de la demanda específica de cada comunidad; la participación de sus propios pobladores para la realización de las acciones; el manejo oportuno de las enfermedades y la mitigación de los riesgos a la salud; todo esto a través de un modelo de atención universal, el plan maestro de infraestructura de salud y acciones dirigidas a la prevención de enfermedades.

El reto actual consiste en fortalecer aún más el financiamiento público de los servicios de salud, llevándolos al menos en la presente administración, en efficientar la aplicación de los recursos hacia aquellas acciones más estratégicas y efectivas, centrando su aplicación en el área de la atención preventiva.

El Programa está dividido en cuatro apartados, en los cuales se abordan cada uno de los rubros de salud:

Diagnóstico. En el que se describe la situación actual del sector salud y su posición en el contexto nacional a partir del análisis de indicadores nacionales.

Visión de largo plazo. Se plantean los objetivos, estrategias y metas sectoriales del programa.

Visión sectorial. Contiene los indicadores que nos muestran la situación inicial en la entidad, los objetivos y estrategias previstos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 con los que se alinean cada una de las acciones que se proponen, los principales proyectos, las metas específicas y la inversión estimada a realizar por los organismos públicos del sector durante los seis años para cada uno de los rubros de salud.

Requerimientos de inversión. Se exponen los montos de recursos necesarios para dar cumplimiento a las metas del sector.

Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012.

Derivado del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 se ha diseñado el Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012 en donde sus objetivos, estrategias y acciones están encaminadas a la planeación, formulación, implementación, ejecución, control y evaluación de programas en materia de agricultura, forestal, bioenergéticos, desarrollo rural, asuntos agrarios, pecuarios, café, plantaciones agroindustriales y horticultura, comercialización, sanidad e inocuidad, así como pesca y acuicultura.

Este Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012 contiene un diagnóstico muy claro de los problemas y como solucionarlos; una visión a largo plazo en donde se indica que se busca hacer y como se va a lograr; una meta global al 2012 y una visión sectorial, siendo un facilitador para que los actores agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y acuícolas conozcan su realidad e intervengan en los programas y proyectos para coadyuvar en la toma de decisiones que con lleve a hacer del campo chiapaneco y del sector pesquero y acuícola ejemplo nacional.

El reto que se enfrenta hoy es el financiamiento, traducido en apoyos económicos y créditos oportunos, de fácil acceso, para realizar inversiones necesarias en la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas que fortalezcan la competitividad y mejoren el nivel de vida de nuestros productores.

La misión del Programa es reactivar el Campo Chiapaneco y el sector pesquero y acuícola realizando cambios estructurales con una visión estratégica a mediano y largo plazo para generar empleo, que permitirá a las familias chiapanecas elevar su nivel de vida y arraigarlos en sus comunidades.

El plan marca la hora del cambio radical de los programas de gobierno hacia el campo y el sector pesquero y agrícola, rompiendo paradigmas, generando encadenamiento de circuitos virtuosos y construyendo una nueva relación con las organizaciones sociales, para impulsar una generación de productores en donde nadie está excluido de este enorme desafío.

El Programa está dividido en cuatro apartados, en los cuales se abordan cada uno de los rubros de Desarrollo Rural Sustentable:

Diagnóstico. En el que se describe la situación actual del sector rural sustentable y su posición en el contexto nacional a partir de análisis de indicadores nacionales.

Visión de largo plazo. Se plantean los objetivos, estrategias y metas sectoriales que se proponen.

Visión sectorial. Contiene los indicadores que nos muestran la situación inicial en la entidad, los objetivos y estrategias previstos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 con los que se alinean cada una de las acciones que se proponen, los principales proyectos, las metas específicas y la inversión estimada a realizar por los organismos públicos del sector durante los seis años para cada uno de los rubros de desarrollo sustentable.

Requerimientos de inversión. Se exponen los montos de recursos necesarios para dar cumplimiento a las metas del sector.

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012.

El Programa incluye las acciones que desde los distintos ejes contribuirán al desarrollo social y al combate a la desigualdad entre ellos: la promoción de la equidad de género; la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de capacidades, de la economía social y el impulso al desarrollo regional y comunitario. La promoción de una cultura de prevención, integración y atención social a grupos en condición de vulnerabilidad, niñas, niños, jóvenes y personas con discapacidad y el fomento a la cultura del deporte y recreación.

Este Programa guiará la acción gubernamental para crear mejores condiciones de vida para la población en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y exclusión social. Contribuirá a disminuir las desigualdades sociales; desde una perspectiva de justicia distributiva que considere a las personas y grupos sociales como sujetos activos del desarrollo, que participarán en la definición, operación y evaluación de las políticas públicas de manera corresponsable.

Para cumplir con este propósito, se establecen objetivos, estrategias, metas y acciones que impulsarán las instituciones del Ejecutivo del estado para superar la situación de pobreza y desigualdad regional.

El Programa está dividido en cuatro apartados, en los cuales se abordan cada uno de los rubros de Desarrollo Social:

Diagnóstico. En el que se describe la situación que prevalece en la entidad, mostrando la relación de las problemáticas con el contexto nacional y da sustento y pertinencia a las acciones programadas.

Visión de largo plazo. Se plantea una descripción de lo que se quiere hacer, cómo se va a lograr y las metas que el sector de desarrollo social propone hacia el 2012.

Visión sectorial. Contiene los indicadores de base sobre los que vamos a intervenir, define los objetivos, estrategias y metas previstas en cada una de las políticas públicas inmersas en el PDCHS 2007-2012.

Requerimientos de inversión. Se exponen los montos necesarios para que la acción institucional cumpla con los objetivos planteados.

Programa Sectorial Fomento Económico, Turístico y de Proyectos Estratégicos 2007-2012.

El programa Sectorial Fomento Económico, Turístico y de Proyectos Estratégicos asume el reto de mejorar la calidad de vida de los chiapanecos con seriedad y seguridad, atacando de frente y a la raíz los problemas. Es un programa ambicioso, que a través de diagnósticos precisos y claros, cuenta con instrumentos y acciones de política pública, orientado a los resultados, a revertir la tendencia económica y a generar más y mejores empleos.

El programa Sectorial atraerá más y mejores inversiones a la entidad, instalar empresas estratégicas de alto valor agregado y consolidar los corredores económicos en donde Chiapas cuenta con ventajas competitivas. Proponiendo estrategias y líneas de acción, mediante las que se realizarán campañas promocionales inteligentes y útiles para la toma de decisiones, mediante instrumentos de vanguardia entre inversionistas estratégicos, dando seguimiento a través de un sistema innovador a inversiones potenciales y en consolidación.

Desde el inicio de esta Administración, se ha planteado con claridad que el reto que tiene el estado es mejorar la calidad de vida de los chiapanecos y ofrecer mejores oportunidades de desarrollo, pues aun con la instrumentación, por varios años, de una política social intensa, Chiapas sigue registrando altos niveles de marginación y pobreza. Uno de cada dos chiapanecos padece de pobreza alimentaria, y tres de cada cuatro de capacidad patrimonial. Además, la brecha económica con las regiones más prósperas continúa creciendo al registrarse un crecimiento económico inferior a la media nacional.

Por ello, esta administración está convencida que sin la transformación radical de la estructura económica no habrán soluciones efectivas a problemas tan apremiantes. Esa es la lección que arrojan las regiones que no sólo rompieron el círculo de la pobreza, sino que además, aumentaron aceleradamente el bienestar de su población.

Carpeta multimedia de negocios y carpetas de corredores económicos, con contenido para la toma de decisiones de los inversionistas.

Campaña promocional de vanguardia, en publicaciones especializadas en negocios de primer nivel y con alta penetración entre los líderes de las empresas más importantes del país.

Programa Cazador de Empresas, que identifique inversionistas mediante una base de datos. Una vez identificados los inversionistas, que por su perfil son potencialmente susceptibles de invertir en la entidad, se establecen encuentros de negocios y visitas directas.

Participación en ferias y eventos, que permitan establecer contacto directo con inversionistas en sectores definidos como estratégicos, presentándoles las ventajas competitivas y los incentivos a la inversión que ofrece Chiapas.

Programa Promotor voluntario, que aliente la participación de empresarios chiapanecos, funcionarios de los tres niveles de gobierno e inversionistas para que actúen como promotores de la inversión a través de sus propios casos de éxito.

Atender las necesidades que la sociedad cotidianamente presenta, implica para las autoridades replantear el escenario económico en el que se desenvuelven las actividades gubernamentales, presupuestar de manera diferente a la que se hacía en épocas anteriores, concibiendo nuevos y más dinámicos instrumentos para satisfacer el interés colectivo.

Chiapas por sus características y extraordinarias riquezas naturales, posee un alto potencial económico y social, haciéndolo satisfactoriamente fuerte frente a otras entidades federativas de la República Mexicana, sin embargo se requieren acciones diversas que permitan consolidar las instituciones y las acciones públicas que se han creado para alcanzar el desarrollo en la Entidad.

En ese sentido, el Gobierno del Estado desde su inicio se ha comprometido en buscar y establecer los mecanismos necesarios que permitan a Chiapas alcanzar el desarrollo que los chiapanecos anhelan y reclaman, por lo que la prestación de servicios públicos, así como el uso, diseño, construcción, conservación, operación, uso, explotación, mantenimiento o aprovechamiento de infraestructura pública, son prioritarios para esta administración y se busca constantemente mejorar su condición, para el bienestar de la sociedad en general.

La calidad en la prestación de servicios públicos así como los diversos aspectos relativos a la infraestructura en Chiapas, requieren contar con las mejores condiciones en quienes se encargarán de ponerlos a disposición de la ciudadanía, pues resultan ser factores determinantes en el desarrollo económico de la colectividad, por lo que las autoridades deben valorar las opciones más adecuadas y eficientes al momento de concesionarlos y considerar asimismo, la economía en el tiempo para brindar y garantizar beneficios a los chiapanecos, debiéndose para tal fin modificar la Ley que regula la materia, cambios que introduzcan la oportunidad de contar con mejores y más rápidos procedimientos dentro de la administración pública y que mediante la transparencia que la ley garantiza, otorguen mayores beneficios a los chiapanecos.

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido a bien emitir el siguiente:

Decreto por el que se aprueban los Programas Sectoriales de Infraestructura y Comunicaciones, Educación, Gobierno, Salud, Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo Social y Fomento Económico, Turístico y de Proyectos Estratégicos 2007-2012.

Artículo Único.- Se aprueban los Programas Sectoriales de Infraestructura y Comunicaciones, Educación, Gobierno, Salud, Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo Social y Fomento Económico, Turístico y de Proyectos Estratégicos 2007-2012.

T r a n s i t o r i o

Único.- El presente decreto comenzará a regir a partir de esta fecha.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique y circule para el conocimiento de la sociedad.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 27 días del mes de diciembre de dos mil siete.- D. P. C. José Ángel Córdova Toledo.- D. S. C. Rafael Ceballos Cancino.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil siete.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Jorge Antonio Morales Messner, Secretario de Gobierno.- Rúbricas.

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 107

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 107

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

C o n s i d e r a n d o

Que la fracción I del artículo 29, de la Constitución Política Local, faculta al Honorable Congreso del Estado, legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes Federales.

Que el Estado de Chiapas, por sus características y extraordinarias riquezas naturales, posee un alto potencial económico y social que lo hace satisfactoriamente fuerte frente a otras Entidades Federativas de la República Mexicana; sin embargo, se requieren acciones diversas que permitan consolidar las instituciones y las acciones públicas para alcanzar el desarrollo en la Entidad.

Atender las necesidades de la sociedad, implica para las autoridades replantear el escenario social y económico en el que se desenvuelven las actividades gubernamentales, programar y ejecutar las acciones de gobierno de manera diferente a la que se hacía en las épocas anteriores, concibiendo nuevos y más dinámicos instrumentos para satisfacer el interés colectivo.

En ese sentido, el actual Gobierno está comprometido en buscar y establecer los mecanismos necesarios que permitan a Chiapas alcanzar el desarrollo que los chiapanecos anhelan y reclaman, por lo que el desarrollo urbano, así como el uso de suelo y destino determinado en los programas de Desarrollo Urbano, son primordiales para la presente administración y se busca constantemente mejorar su condición, para el bienestar de la sociedad en general.

En esa medida, y con la finalidad de adecuar y modernizar la normas relativas al desarrollo urbano en la Entidad, y establecer mecanismos que permitan el cumplimiento de los programas respectivos, se reforma la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, con el propósito de alcanzar el cumplimiento de los proyectos realizados a través del establecimiento de un período determinado en el que se limiten su modificación y actualización, y con ello procurar el desarrollo ordenado en la asignación de uso de suelo para el desarrollo urbano.

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido a bien emitir el siguiente:

Decreto por el que se Reforma el Artículo 45, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 45, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 45.- Las asignaciones de los usos de suelo y destino determinados en los Programas de Desarrollo Urbano, no serán modificados en un lapso de cinco años, a partir de la entrada en vigor del Programa respectivo; después de dicho período podrán ser utilizados en usos compatibles para la zona de que se trate, previo análisis de la autoridad competente.

T r a n s i t o r i o s

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 27 días del mes de Diciembre de dos mil siete.- D. P. C. José Ángel Córdova Toledo.- D. S. C. Rafael Ceballos Cancino.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil siete.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Jorge Antonio Morales Messner, Secretario de Gobierno.- Rúbricas.

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 108

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 108

La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y

C o n s i d e r a n d o

Que la fracción I del Artículo 29, de la Constitución Política Local, faculta al Honorable Congreso del Estado, legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a las Leyes Federales.

Desde los inicios de la administración, se impulsó la consolidación del Estado de Derecho y de la correcta impartición de Justicia, a través de diversas reformas enviadas al Poder Legislativo, dentro de ellas, la reestructuración del Poder Judicial, en el cual se instituyó al Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, como órgano que no solo sanciona y juzga las controversias derivadas de procesos electorales, sino también como órgano especializado en los litigios contenciosos administrativos.

En la búsqueda de mejores condiciones de vida para la sociedad, se encuentra inmerso el desarrollo y fortalecimiento de la cultura de la legalidad, ello a través de la construcción de instituciones jurídicas que garanticen el acceso a la justicia, y el correcto actuar de las autoridades de la administración pública Estatal y Municipal.

La presente Ley, en la cual se regulan los Procedimientos Administrativos, en dos grandes vertientes. En primer término el Procedimiento Administrativo, entendido como el conjunto de actos de las autoridades tanto estatales como municipales, en la aplicación y vigilancia de su normatividad aplicable. En segundo término, el Procedimiento Contencioso Administrativo, entendiendo este como el conjunto

de actos procesales por el cual los gobernados pueden hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional para ejercitar el derecho de acción sobre aquellos actos que hayan realizado en exceso las autoridades administrativas, a fin de obtener la nulidad de los actos impugnados.

En este orden de ideas, es de gran trascendencia para el desarrollo de la cultura de la legalidad, el unificar un solo procedimiento administrativo para el desarrollo de la actividad de todas las autoridades administrativas, con ello se genera seguridad jurídica para los gobernados, y se hace eficiente el desarrollo de la actuación de las autoridades administrativas, en la generación de actos administrativos. Destacando, la sistematización en la actuación de las autoridades administrativas tanto del Estado como de los municipios.

En este orden de ideas, el libro primero de la Ley que se propone, regula al procedimiento administrativo propiamente dicho, es decir aquellos actos que emanados de las autoridades administrativas tanto del Estado como de los Municipios vinculan al gobernado al cumplimiento de una obligación o le otorgan el goce de un derecho en el marco normativo en que se encuentran inmersos las autoridades.

Así pues, se establecen los elementos y requisitos del acto administrativo, con lo que se consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica al determinar los puntos torales en los cuales deben de girar las actuaciones de las autoridades administrativas para producir efectos legales y ser exigibles y válidos en su contenido.

Asimismo, se regula la ineficacia de dichos actos, es decir la consecuencia de que acarreará el acto administrativo cuando en su emisión no se cumplen los requisitos que señala la Ley, siendo la primer consecuencia la nulidad del acto cuando los requisitos de los que carece el acto administrativo no pueden ser subsanables sin perjudicar al gobernado; como segunda consecuencia la anulabilidad del acto administrativo, es decir, la afectación de aquellos actos que contienen vicios en su emisión pero que pueden convalidarse y con ello producir plenos efectos jurídicos; se establecen los efectos jurídicos que se producen de la eficacia del acto administrativo, la exigencia y obligatoriedad del mismo, y la extinción de dichos actos de autoridad.

En pro de fortalecer la cultura de la legalidad, y fomentar la realización legal y fundamentada de las actuaciones de las autoridades administrativas, se crean normas de carácter general que regularan el procedimiento administrativo, encaminando a que la actuación administrativa en el procedimiento se desarrolle con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.

Asimismo, para fortalecer el cumplimiento de las disposiciones administrativas se faculta a las autoridades tanto estatales como municipales a realizar visitas de verificación determinando los requisitos de legalidad que deben de observarse, generando con ello certeza jurídica y fortaleciendo la actuación de las autoridades.

En caso de incumplimiento comprobado por la autoridad, se establecen los requisitos que deben de cumplirse para sancionar a los infractores, para que, dichas sanciones sean legítimas y cumplan con la finalidad de constreñir al cumplimiento de las Normas Administrativas.

Para dar oportunidad de defensa al gobernado y en estricto apego a las garantías de audiencia y de legalidad se establece el recurso administrativo de revisión, como el medio optativo por el cual el recurrente puede solicitar a la autoridad administrativa que revise el acto de autoridad que le cause una posible afectación para que en su caso sea revocada, modificada o anulada.

Este procedimiento se aplicará a los actos de autoridad de todas las dependencias, entidades y autoridades estatales y municipales y sustituirá a los recursos que otras leyes y disposiciones administrativas regulen, con lo que se uniforma los criterios por medio de los cuales el Estado y los Municipios pueden revisar el contenido de un acto administrativo, fortaleciendo la cultura de la legalidad y la aplicación del Estado de Derecho.

En el libro segundo de la Ley que se propone, se regula al procedimiento contencioso administrativo, el cual se tramitará ante el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, por medio del Juicio de Nulidad el cual tendrá como finalidad que la autoridad Judicial declare en caso de que un acto no haya reunido los requisitos legales del acto administrativo, la Nulidad del acto atacado.

Asimismo, se prevé el establecimiento del juicio de nulidad promovido por la autoridad cuando, en exceso de facultades y fuera de los parámetros legales se haya beneficiado a un particular, dando acción a las autoridades para demandar la nulidad de los actos lesivos al Estado.

Se determinan las reglas de carácter procesal, las notificaciones, los términos, los incidentes, causas de improcedencia y sobreseimiento del juicio, las resoluciones atacables mediante Juicio de nulidad, los requisitos de la demanda, los documentos que deben de adjuntarse, la solicitud de suspensión del acto impugnado, los requisitos de la contestación, los medios probatorios, la valoración de las pruebas, las sentencias y el recurso de revisión ante el Pleno del Tribunal como segunda instancia revisora de la legalidad de las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal.

Asimismo, se regula la creación de criterios por el pleno del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, la aplicatoriedad y causas de desestimación de los mismos.

En este orden de ideas se establece un procedimiento judicial moderno y adecuado a la realidad estatal, que fortalecerá a las instituciones públicas y legitimará la actuación Gubernativa, a través de las resoluciones que dicte el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa.

Para efectos de llevar a cabo lo anterior, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Justicia, consideran necesario realizar modificaciones a diversas disposiciones de la Ley en materia del presente dictamen, fortaleciendo el cumplimiento de las disposiciones administrativas, acorde y con estricto apego a las garantías y principios de economía celeridad, audiencia, legalidad, publicidad y buena fe y con ello hacer más efectiva la aplicación de la justicia administrativa en el estado de Chiapas.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien emitir la siguiente:

Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas

Libro Primero Del Procedimiento Administrativo

Título Primero Del Ámbito de Aplicación y Principios Generales

Capítulo Único

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Estatal centralizada y Paraestatal.

El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública Municipal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado o los Municipios presten de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el Estado o los Municipios.

Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales.

Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas.

Artículo 2.- Esta Ley, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente.

Título Segundo Del Régimen Jurídico de los Actos Administrativos

Capítulo Primero Del Acto Administrativo

Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:

- I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;
- II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;
- III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;
- IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;

- V. Estar fundado y motivado;
- VI. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley;
- VII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;
- VIII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;
- IX. Mencionar el órgano del cual emana;
- X. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas;
- XI. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;
- XII. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;
- XIII. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan; y
- XIV. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.

Artículo 4.- Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal así como de la administración pública municipal, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado para que produzcan efectos jurídicos.

Capítulo Segundo De la Nulidad y Anulabilidad Del Acto Administrativo

Artículo 5.- La omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el Artículo 3 de esta Ley, o por las leyes administrativas de las materias de que se trate, producirán, según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo.

Artículo 6.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las fracciones I a IX del Artículo 3 de la presente Ley, producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad será declarada por el mismo.

El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se presumirá legítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos.

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que la hubiere emitido u ordenado.

Artículo 7.- La omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señalados en las fracciones X a XIV del Artículo 3 de esta Ley, producirá la anulabilidad del acto administrativo.

El acto declarado anulable se considerará válido; gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad; y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán obligación de cumplirlo.

El saneamiento del acto anulable producirá efectos retroactivos y el acto se considerará como si siempre hubiere sido válido.

Capítulo Tercero De la Eficacia del Acto Administrativo

Artículo 8.- El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.

Artículo 9.- El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el acto administrativo por el cual se otorgue un beneficio al particular, caso en el cual su cumplimiento será exigible por éste al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó o aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia; así como los casos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección, investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de esta u otras leyes, los cuales son exigibles a partir de la fecha en que la Administración Pública Estatal o Municipal en su caso los efectúe.

Artículo 10.- Si el acto administrativo requiere aprobación de órganos o autoridades distintos del que lo emita, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, no tendrá eficacia sino hasta en tanto aquélla se produzca.

Capítulo Cuarto De la Extinción del Acto Administrativo

Artículo 11.- El acto administrativo de carácter individual se extingue de pleno derecho, por las siguientes causas:

- I. Cumplimiento de su finalidad;
- II. Expiración del plazo;
- III. Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término suspensivo y éste no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto;
- IV. Acaecimiento de una condición resolutoria;
- V. Renuncia del interesado, cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo beneficio de éste y no sea en perjuicio del interés público; y
- VI. Por revocación, cuando así lo exija el interés público, de acuerdo con la ley de la materia.

Título Tercero Del Procedimiento Administrativo

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 12.- Las disposiciones de este Título son aplicables a la actuación de los particulares ante la Administración Pública Estatal, de la Administración Pública Municipal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa.

Artículo 13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.

Artículo 14.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada.

Artículo 15.- La Administración Pública Estatal y Municipal no podrán exigir más formalidades que las expresamente previstas en la Ley.

Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital.

El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos.

Artículo 16.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se disponga otra cosa respecto de algún trámite:

- I. Los trámites deberán presentarse solamente en original, y sus anexos, en copia simple, en un tanto. Si el interesado requiere que se le acuse recibo, deberá adjuntar una copia para ese efecto;
- II. Todo documento original puede presentarse en copia certificada y éstos podrán acompañarse de copia simple, para cotejo, caso en el que se regresará al interesado el documento cotejado;
- III. En vez de entregar copia de los permisos, registros, licencias y, en general, de cualquier documento expedido por la dependencia u organismo descentralizado de la administración pública estatal o municipal ante la que realicen el trámite, los interesados podrán señalar los datos de identificación de dichos documentos, y
- IV. Excepto cuando un procedimiento se tenga que dar vista a terceros, los interesados no estarán obligados a proporcionar datos o entregar juegos adicionales de documentos entregados previamente a la dependencia u organismo descentralizado de la administración pública estatal o municipal ante la que realicen el trámite correspondiente, siempre y cuando señalen los datos de identificación del escrito en el que se citaron o con el que se acompañaron y el nuevo trámite lo realicen ante la propia dependencia u organismo descentralizado, aun y cuando lo hagan ante una unidad administrativa diversa, incluso si se trata de un órgano administrativo desconcentrado.

Artículo 17.- La Administración Pública Estatal y Municipal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones:

- I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en la Ley, previa citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla;
- II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación, sólo en aquellos casos previstos en esta u otras leyes;
- III. Hacer del conocimiento de éstos, en cualquier momento, del estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico, y a proporcionar copia de los documentos contenidos en ellos;
- IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, la presentación de los mismos;
- V. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta por el órgano competente al dictar resolución;
- VI. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando;
- VII. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar;
- VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en esta u otras leyes;

- IX. Tratar con respeto a los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; y
- X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley.

Artículo 18.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia, organismo descentralizado o paraestatal resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.

Artículo 19.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite.

Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como un día completo. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo.

De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste.

Artículo 20.- Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que la autoridad conteste empezarán a correr al día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente.

Artículo 21.- El procedimiento administrativo continuará de oficio, sin perjuicio del impulso que puedan darle los interesados. En caso de corresponderles a estos últimos y no lo hicieren, operará la caducidad en los términos previstos en esta Ley.

Capítulo Segundo De los Interesados

Artículo 22.- Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de representante o apoderado.

La representación de las personas físicas o morales ante la Administración Pública Estatal o Municipal para formular solicitudes, participar en el procedimiento administrativo, interponer recursos, desistirse y renunciar a derechos, deberá acreditarse mediante instrumento público, y en el caso de personas físicas, también mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las propias autoridades o fedatario público, o declaración en comparecencia personal del interesado.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal mediante escrito firmado podrá autorizar a la persona o personas que estime pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación de tal procedimiento, incluyendo la interposición de recursos administrativos.

Artículo 23.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación fungieren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante común o interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.

Capítulo Tercero Impedimentos, Excusas y Recusaciones

Artículo 24.- Todo servidor público estará impedido para intervenir o conocer de un procedimiento administrativo cuando:

- I. Tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pudiera influir en la de aquél; sea administrador de sociedad o entidad interesada, o tenga litigio pendiente con algún interesado;
- II. Tengan interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo;
- III. Hubiere parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas o con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento;
- IV. Exista amistad o enemistad manifiesta que se hagan patentes mediante hechos o actitudes evidentes del servidor público que la demuestre objetivamente o con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior;
- V. Intervenga como perito o como testigo en el asunto de que se trata;

- VI. Tenga relación de servicio, sea cual fuera su naturaleza, con las personas físicas o morales interesadas directamente en el asunto; y
- VII. Por cualquier otra causa prevista en ley.

Artículo 25.- El servidor público que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el Artículo anterior, tan pronto tenga conocimiento de la misma, se excusará de intervenir en el procedimiento y lo comunicará a su superior inmediato, quien resolverá lo conducente dentro de los tres días siguientes.

Cuando hubiere otro servidor público con competencia, el superior jerárquico turnará el asunto a éste; en su defecto, dispondrá que el servidor público que se hubiere excusado resuelva, bajo la supervisión de su superior jerárquico.

Artículo 26.- La intervención del servidor público en el que concurra cualquiera de los impedimentos a que se refiere el Artículo 24 de esta Ley, no implicará necesariamente la invalidez de los actos administrativos en que haya intervenido, pero dará lugar a responsabilidad administrativa.

Artículo 27.- El superior jerárquico cuando tenga conocimiento de que alguno de sus subalternos se encuentra en alguna de las causales de impedimento a que se refiere el Artículo 25 de la presente Ley, ordenará que se inhiba de todo conocimiento.

Artículo 28.- Cuando el servidor público no se inhibiere a pesar de existir alguno de los impedimentos expresados, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, el interesado podrá promover la recusación.

Artículo 29.- La recusación se planteará por escrito ante el superior jerárquico del recusado, expresando la causa o causas en que se funda, acompañando al mismo las pruebas pertinentes.

Al día siguiente de integrado el expediente con la documentación a que se refiere el párrafo anterior, el recusado manifestará lo que considere pertinente. El superior resolverá en el plazo de tres días, lo procedente.

A falta de informe rendido por el recusado, se tendrá por cierto el impedimento interpuesto.

Artículo 30.- Contra las resoluciones adoptadas en materia de impedimentos, excusas y recusaciones no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra la resolución que dé por concluido el procedimiento.

Capítulo Cuarto De los Términos y Plazos

Artículo 31.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles.

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, el 1o. de enero; 5 de febrero; el tercer lunes de

marzo en conmemoración del 21 de marzo; el primer lunes de mayo en conmemoración del 1o. de mayo; 5 de mayo; 14 y 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, 8 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Estatal y el 25 de diciembre, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la Dependencia respectiva, que se publicará en el Periódico Oficial del Estado.

Los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y motivada por la autoridad competente.

La autoridad podrá, de oficio o a petición de parte interesada, habilitar días inhábiles, cuando así lo requiera el asunto.

Artículo 32.- En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

Artículo 33.- Las diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo se efectuarán conforme a los horarios que cada dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal o Municipal previamente establezca y publique en el Periódico Oficial del Estado, y en su defecto, las comprendidas entre las 8:00 a las 20:00 horas. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.

Las autoridades administrativas, en caso de urgencia o de existir causa justificada, podrán habilitar horas inhábiles cuando la persona con quien se vaya a practicar la diligencia realice actividades objeto de investigación en tales horas.

Artículo 34.- Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes administrativas, la Administración Pública Estatal o Municipal, de oficio o a petición de parte interesada, podrá ampliar los términos y plazos establecidos, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la mitad del plazo previsto originalmente, cuando así lo exija el asunto y no se perjudiquen los derechos de los interesados o de terceros.

Artículo 35.- Para efectos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, visitas e informes, a falta de términos o plazos establecidos en las leyes administrativas para la realización de trámites, aquéllos no excederán de diez días. El órgano administrativo deberá hacer del conocimiento del interesado dicho plazo.

Capítulo Quinto Del Acceso a la Documentación e Información

Artículo 36.- Los interesados en un procedimiento administrativo tendrán derecho de conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación, recabando la oportuna información en las oficinas correspondientes, salvo cuando contengan información sobre la seguridad del Estado, sean relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial, en los que el interesado no sea titular o causahabiente, o se trate de asuntos en que exista disposición legal que lo prohíba.

Artículo 37.- Los interesados podrán solicitar les sea expedida a su costa, copia certificada de los documentos contenidos en el expediente administrativo en el que se actúa, salvo en los casos a que se refiere el Artículo anterior.

Capítulo Sexto De las Notificaciones

Artículo 38.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse:

- I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;
- II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, y
- III. Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal.

Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar.

Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la resolución administrativa definitiva deberá notificarse al interesado por medio de correo certificado o mensajería, en ambos casos con acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del servicio respectivo.

Artículo 39.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.

Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 40.- Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y tres veces en el lapso de nueve días en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio Estatal.

Artículo 41.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo.

En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio Estatal.

Artículo 42.- Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición.

Capítulo Séptimo De la Impugnación de Notificaciones

Artículo 43.- Las notificaciones irregularmente practicadas surtirán efectos a partir de la fecha en que se haga la manifestación expresa por el interesado o su representante legal de conocer su contenido o se interponga el recurso correspondiente.

Artículo 44.- El afectado podrá impugnar los actos administrativos recurribles que no hayan sido notificados o no se hubieren apegado a lo dispuesto en esta ley, conforme a las siguientes reglas:

- I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo materia de la notificación, la impugnación contra la misma se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo correspondiente, en el que manifestará la fecha en que lo conoció;

En caso de que también impugna el acto administrativo, los agravios se expresarán en el citado recurso, conjuntamente con los que se acumulen contra la notificación;

- II. Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso administrativo correspondiente ante la autoridad competente para notificar dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en el que se le deba dar a conocer y el nombre de la persona autorizada para recibirlo, en su caso. Si no se señalare domicilio, la autoridad dará a conocer el acto mediante notificación por edictos; si no se señalare persona autorizada, se hará mediante notificación personal.

El particular tendrá un plazo de quince días a partir del día siguiente a aquel en que la autoridad se los haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación, o cualquiera de ellos según sea el caso;

- III. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estudiará los agravios expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación que, en su caso, se haya hecho del acto administrativo; y

- IV. Si se resuelve que no hubo notificación o que ésta no fue efectuada conforme a lo dispuesto por la presente Ley, se tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le dio a conocer en los términos de la Fracción II del presente Artículo, quedando sin efectos todo lo actuado con base en aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto.

Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, desechará dicho recurso.

Capítulo Octavo De la Iniciación

Artículo 45.- Los escritos dirigidos a la Administración Pública Estatal o Municipal en su caso, deberán presentarse directamente en sus oficinas autorizadas para tales efectos, en las oficinas de correos, mediante mensajería o telefax, salvo el caso del escrito inicial de impugnación, el cual deberá presentarse precisamente en las oficinas administrativas correspondientes.

Cuando un escrito sea presentado ante un órgano incompetente, dicho órgano remitirá la promoción al que sea competente en el plazo de cinco días. En tal caso, se tendrá como fecha de presentación la del acuse de recibo del órgano incompetente, salvo que éste aperciba al particular en el sentido de que su recurso se recibe sólo para el efecto de ser turnado a la autoridad competente; de esta circunstancia deberá dejarse constancia por escrito en el propio documento y en la copia sellada que al

efecto se exhiba.

Los escritos recibidos por correo certificado con acuse de recibo se considerarán presentados en las fechas que indique el sello fechador de la oficina de correos, excepto en los casos en que hubieren sido dirigidos a una autoridad que resulte incompetente. Para tal efecto, se agregará al expediente el sobre sin destruir en donde aparezca el sello fechador, y cuando así proceda se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 46.- En ningún caso se podrán rechazar los escritos en las unidades de recepción de documentos.

Cuando en cualquier estado se considere que alguno de los actos no reúne los requisitos necesarios, el órgano administrativo lo pondrá en conocimiento de la parte interesada, concediéndole un plazo de cinco días para su cumplimiento. Los interesados que no cumplan con lo dispuesto en este Artículo, se les podrá declarar la caducidad del ejercicio de su derecho, en los términos previstos en la presente Ley.

Artículo 47.- Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar las medidas provisionales establecidas en las leyes administrativas de la materia, y en su caso, en la presente ley para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieren suficientes elementos de juicio para ello.

Artículo 48.- Los titulares de los órganos administrativos ante quienes se inicie o se tramite cualquier procedimiento administrativo, de oficio o a petición de parte interesada, podrán disponer su acumulación. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

Capítulo Noveno De la Tramitación

Artículo 49.- En el despacho de los expedientes se guardará y respetará el orden riguroso de tramitación en los asuntos de la misma naturaleza; la alteración del orden sólo podrá realizarse cuando exista causa debidamente motivada de la que quede constancia.

El incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa de responsabilidad del servidor público infractor.

Artículo 50.- Las cuestiones incidentales que se susciten durante el procedimiento no suspenderán la tramitación del mismo, incluyendo la recusación, en la inteligencia que de existir un procedimiento incidental de recusación, éste deberá resolverse antes de dictarse resolución definitiva o en la misma resolución.

Artículo 51.- Los incidentes se tramitarán por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto que lo motive, en el que expresará lo que a su derecho conviniere, así como las pruebas que estime pertinentes fijando los puntos sobre los que versen; una vez desahogadas, en su caso, las pruebas que hubiere ofrecido, en el término que se fije y que no excederá de diez días, el órgano administrativo resolverá el incidente planteado.

Artículo 52.- Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse resolución, se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento.

Artículo 53.- En los procedimientos administrativos se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades administrativas, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.

La autoridad podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley.

El órgano o autoridad de la Administración Pública Estatal o Municipal ante quien se tramite un procedimiento administrativo, acordará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral y al derecho. Tal resolución deberá estar debidamente fundada y motivada.

Artículo 54.- El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no menor a tres ni mayor de quince días, contado a partir de su admisión.

Si se ofreciesen pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días para tal efecto.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva.

Artículo 55.- El órgano administrativo notificará a los interesados, con una anticipación de tres días, el inicio de las actuaciones necesarias para el desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas.

Artículo 56.- Cuando las disposiciones legales así lo establezcan o se juzgue necesario, se solicitarán los informes u opiniones necesarios para resolver el asunto, citándose el precepto que lo exija o motivando, en su caso, la conveniencia de solicitarlos.

Artículo 57.- Los informes u opiniones solicitados a otros órganos administrativos podrán ser obligatorios o facultativos, vinculantes o no. Salvo disposición legal en contrario, los informes y opiniones serán facultativos y no vinculantes al órgano que los solicitó y deberán incorporarse al expediente.

Artículo 58.- A quien se le solicite un informe u opinión, deberá emitirlo dentro del plazo de quince días, salvo disposición que establezca otro plazo.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no se recibiese el informe u opinión, cuando se trate de informes u opiniones obligatorios o vinculantes, se entenderá que no existe objeción a las pretensiones del interesado.

Artículo 59.- Concluida la tramitación del procedimiento administrativo y antes de dictar resolución se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados, para que en su caso, formulen alegatos, los que serán tomados en cuenta por el órgano competente al dictar la resolución.

Los interesados en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez podrán presentar por escrito sus alegatos.

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifestaran su decisión de no presentar alegatos, se tendrá por concluido el trámite.

Capítulo Décimo De la Terminación

Artículo 60.- Ponen fin al procedimiento administrativo:

- I. La resolución del mismo;
- II. El desistimiento;
- III. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico.
- IV. La declaración de caducidad;
- V. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, y
- VI. El convenio de las partes, siempre y cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico ni verse sobre materias que no sean susceptibles de transacción, y tengan por objeto satisfacer el interés público, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regula.

Artículo 61.- Todo interesado podrá desistirse de su solicitud o renunciar a sus derechos, cuando éstos no sean de orden e interés públicos. Si el escrito de iniciación se hubiere formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquel que lo hubiese formulado.

Artículo 62.- La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y de oficio las derivadas del mismo; en su caso, el órgano administrativo competente podrá decidir sobre las mismas, poniéndolo, previamente, en conocimiento de los interesados por un plazo no superior de diez días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas que estimen convenientes.

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin perjuicio de la potestad de la Administración Pública Estatal o Municipal de iniciar de oficio un nuevo procedimiento.

Artículo 63.- En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la Administración Pública Estatal o Municipal le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración Pública Estatal o Municipal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente Ley.

La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la Administración Pública Estatal o Municipal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.

Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución.

Artículo 64.- En aquellos casos en que medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, la autoridad competente podrá emitir el acto administrativo sin sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento administrativo previstos en esta Ley, respetando en todo caso las garantías individuales.

Capítulo Décimo Primero De las Visitas de Verificación

Artículo 65.- Las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier tiempo.

Artículo 66.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten.

Artículo 67.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor.

Artículo 68.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el Artículo 66 de la presente Ley, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento.

Artículo 69.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquella se hubiere negado a proponerlos.

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta.

Artículo 70.- En las actas se hará constar:

- I. Nombre, denominación o razón social del visitado;
- II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
- III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;
- IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;
- V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
- VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
- VII. Datos relativos a la actuación;
- VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y
- IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa.

Artículo 71.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado.

Artículo 72.- Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades previstas para las visitas de verificación.

Título Cuarto De las Infracciones y Sanciones Administrativas

Capítulo Único

Artículo 73.- Las sanciones administrativas deberán estar previstas en las leyes respectivas y podrán consistir en:

- I. Amonestación con apercibimiento;
- II. Multa;
- III. Multa adicional por cada día que persista la infracción;
- IV. Arresto hasta por 36 horas;
- V. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y
- VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos.

Artículo 74.- Es causa de responsabilidad el incumplimiento de esta Ley y serán aplicables las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas.

Artículo 75.- Sin perjuicio de lo establecido en las leyes administrativas, en caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta a que se haya hecho acreedor por la infracción anterior, sin que su monto exceda del doble del máximo.

Artículo 76.- Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que este dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente.

Artículo 77.- La autoridad administrativa fundará y motivará su resolución, considerando:

- I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;
- II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
- III. La gravedad de la infracción; y
- IV. La reincidencia del infractor.

Artículo 78.- Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá, dentro de los diez días siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal o por correo certificado.

Artículo 79.- Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.

Artículo 80.- Las sanciones administrativas podrán imponerse en más de una de las modalidades previstas en el Artículo 73 de esta Ley, salvo el arresto.

Artículo 81.- Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente así como el monto total de todas ellas.

Cuando en una misma acta se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda.

Artículo 82.- Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores.

Artículo 83.- La facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en cinco años. Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada o, desde que cesó si fuere continua.

Artículo 84.- Cuando el infractor impugne los actos de la autoridad administrativa se interrumpirá la prescripción hasta en tanto la resolución definitiva que se dicte no admita ulterior recurso.

Los interesados podrán hacer valer la prescripción por vía de excepción y la autoridad deberá declararla de oficio.

Título Sexto Medidas de Seguridad

Capítulo Único

Artículo 85.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad competente para proteger la salud y la seguridad públicas. Las medidas de seguridad se establecerán en cada caso por las leyes administrativas.

Artículo 86.- Las autoridades administrativas con base en los resultados de la visita de verificación o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo adecuado para su realización. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades respectivas.

Título Séptimo Del Recurso de Revisión

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 87.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados estatales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquellos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.

Artículo 88.- La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva.

Artículo 89.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra.

Artículo 90.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Dicho escrito deberá expresar:

- I. El órgano administrativo a quien se dirige;
- II. El nombre del recurrente, y del tercero interesado si lo hubiere, así como el lugar que señale para efectos de notificaciones;
- III. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;
- IV. Los agravios que se le causan;
- V. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna; y
- VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas morales.
- VII. Estar suscrito por quien deba hacerlo o por quien tenga personalidad para ello, en términos de la ley.

Artículo 91.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando:

- I. Lo solicite expresamente el recurrente;
- II. Sea procedente el recurso;
- III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público;
- IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y

- V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión.

Artículo 92.- El recurso se tendrá por no interpuesto cuando:

- I. Se presente fuera de plazo;
- II. No reúna los requisitos establecidos en el Artículo 90 de la presente Ley.

Artículo 93.- Se desechará por improcedente el recurso:

- I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado;
- II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente;
- III. Contra actos consumados de un modo irreparable;
- IV. Contra actos consentidos expresamente; y
- V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal Interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo.

Artículo 94.- Será sobreseído el recurso cuando:

- I. El recurrente se desista expresamente del recurso;
- II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su persona;
- III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el Artículo anterior;
- IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo;
- V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y
- VI. No se probare la existencia del acto respectivo.

Artículo 95.- La autoridad encargada de resolver el recurso podrá:

- I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo;
- II. Confirmar el acto impugnado;

- III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente;
y
- IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Artículo 96.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto.

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.

Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución.

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.

Artículo 97.- No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se precisará ésta.

Artículo 98.- El recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado.

Artículo 99.- La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad.

La tramitación de la declaración no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para la interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto.

Artículo 100.- Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no obren en el expediente original derivado del acto impugnado, se pondrá de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos que estime procedentes.

No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o alegatos del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el procedimiento administrativo no lo haya hecho.

Libro Segundo
Del Procedimiento Contencioso Administrativo

Título I
Del Juicio Contencioso Administrativo

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 101.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas en lo que no contravenga las disposiciones que regulan el juicio contencioso administrativo que establece esta Ley.

Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

Artículo 102.- El juicio contencioso administrativo, procede contra las resoluciones administrativas definitivas siguientes:

- I. Las dictadas por autoridades fiscales Estatales y Municipales, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;
- II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código de la Hacienda Pública, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;
- III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas Estatales y Municipales;
- IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;
- V. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario Estatal o al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas;
- VI. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios;
- VII. Las que requieran el pago de garantías a favor del Estado o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales;

- VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos del Libro Primero de Esta ley.
- IX. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este Artículo;
- X. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este Artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, y del Libro Primero de esta Ley o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa, y

- XI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este Artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

Artículo 103.- El Tribunal Justicia Electoral y Administrativa conocerá de los juicios en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

El procedimiento para conocer de estos juicios será el que señale la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas y del libro segundo de esta Ley.

Artículo 104.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:

- I. El demandante.
- II. Los demandados. Tendrán ese carácter:
 - a) La autoridad que dictó la resolución impugnada.
 - b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa.

III. El tercero interesado que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

Artículo 105.- Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego.

Cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda deberá ir firmada por cada una de ellas, y designar a un representante común que elegirán de entre ellas mismas, si no lo hicieren, el Magistrado Ponente nombrará con tal carácter a cualquiera de los interesados, al admitir la demanda.

Artículo 106.- Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso.

La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del Tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces, de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva.

La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo del Estado en su Reglamento o decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley de Entidades Paraestatales, o los decretos de Creación de los Organismo Públicos, La Ley Orgánica Municipal y los Reglamentos Municipales en caso de los Municipios.

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines.

Artículo 107.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que promuevan.

Artículo 108.- Los miembros del Tribunal incurren en responsabilidad si:

- I. Expresan su juicio respecto de los asuntos que estén conociendo, fuera de las oportunidades en que esta Ley lo admite.
- II. Informan a las partes y en general a personas ajenas al Tribunal sobre el contenido o el sentido de las resoluciones jurisdiccionales, antes de que éstas se emitan y en los demás casos, antes de su notificación formal.
- III. Informan el estado procesal que guarda el juicio a personas que no estén autorizadas por las partes en los términos de esta Ley.
- IV. Dan a conocer información confidencial o comercial reservada.

Capítulo II De los Términos

Artículo 109.- El cómputo de los plazos se sujetará a las reglas siguientes:

- I. Empezarán a correr a partir del día en que surta efectos la notificación.
- II. Si están fijados en días, se computarán sólo los hábiles entendiéndose por éstos aquellos en que se encuentren abiertas al público las oficinas de las Salas del Tribunal durante el horario normal de labores. La existencia de personal de guardia no habilita los días en que se suspendan las labores.
- III. Si están señalados en periodos o tienen una fecha determinada para su extinción, se comprenderán los días inhábiles; no obstante, si el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil, el término se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
- IV. Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario se entenderá en el primer caso que el plazo vence el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que se inició y en el segundo caso, el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquél en que se inició. Cuando no exista el mismo día en los plazos que se fijen por mes, éste se prorrogará hasta el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

Capítulo III De las Notificaciones

Artículo 110.- Toda resolución debe notificarse, a más tardar el tercer día siguiente a aquel en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.

Las notificaciones que se realicen a las autoridades por conducto de su Oficialía de Partes u Oficina de recepción, se entenderán legalmente efectuadas cuando en el documento correspondiente obre el sello de recibido por tales oficinas.

Artículo 111.- En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación, así como de las notificaciones personales y por lista. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a dichas actuaciones.

Artículo 112.- Las notificaciones que deban hacerse a los particulares, se harán en los locales de las salas si las personas a quienes deba notificarse se presentan dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se haya dictado la resolución. Cuando el particular no se presente se harán por lista autorizada que se fijará en sitio visible de dichos locales. A fin de facilitar su consulta, la lista mencionada podrá ser incluida en la página electrónica del Tribunal.

Tratándose del auto que corra traslado de la demanda o del que mande citar a testigos que no deban ser presentados por la parte oferente, la notificación a los particulares o a quien los represente, se hará personalmente o por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio que se haya hecho del conocimiento de la Sala de que se trate, siempre que dicho domicilio se encuentre en territorio del Estado.

Una vez que los particulares, partes en el juicio, se apersonen en éste, deberán señalar domicilio conforme lo establece la fracción I del Artículo 126 de esta Ley, en el que se le harán saber, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, las siguientes resoluciones:

- I. La que tenga por admitida la contestación y, en su caso, de la ampliación de la demanda, así como la contestación a la ampliación citada.
- II. El requerimiento, a la parte que debe cumplirlo.
- III. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional y la sentencia que resuelva la definitiva.
- IV. Las resoluciones que puedan ser recurridas.
- V. La resolución de sobreseimiento.
- VI. La sentencia definitiva, y
- VII. En todos aquellos casos en que el Magistrado Ponente o la Sala así lo ordenen.

En caso de incumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, las notificaciones se harán a los particulares por medio de la lista a que se refiere este Artículo, la cual contendrá el nombre de la persona, la clave del expediente y el tipo de acuerdo. En los autos se hará constar la fecha de la lista.

Artículo 113.- Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades administrativas se harán por oficio y por vía telegráfica en casos urgentes.

Tratándose de las autoridades, las resoluciones que se dicten en los juicios que se tramiten ante el Tribunal se deberán notificar en todos los casos, únicamente a la unidad administrativa a la que corresponda la representación en juicio de la autoridad señalada en el Artículo 106, tercer párrafo de esta Ley.

Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar de la sede de la Sala, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.

Artículo 114.- Una vez emplazada la autoridad demandada, deberá señalar domicilio en cualquier parte del territorio del Estado, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala competente, en el que se le harán las notificaciones de los autos y resoluciones posteriores y, para el caso de incumplimiento a lo anterior, las notificaciones se le harán por medio de lista autorizada.

Artículo 115.- Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas. En los casos de notificaciones por lista se tendrá como fecha de notificación la del día en que se hubiese fijado.

Artículo 116.- La notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, también se entenderá legalmente efectuada cuando se lleve a cabo por cualquier medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los actos que se notifiquen.

Artículo 117.- Una notificación omitida o irregular se entenderá legalmente hecha a partir de la fecha en que el interesado se haga sabedor de su contenido.

Capítulo IV De los Exhortos

Artículo 118.- Las diligencias de notificación o, en su caso, de desahogo de alguna prueba, que deban practicarse en lugar distinto de la correspondiente a la sede de las Salas, deberán tramitarse vía exhorto.

Para diligenciar el exhorto el magistrado del Tribunal podrá solicitar el auxilio de la Sala Civil del Consejo de la Magistratura, o del Juez Civil o Mixto de Primera Instancia de la localidad donde haya de diligenciarse el exhorto.

Artículo 119.- Los exhortos se despacharán al día siguiente hábil a aquel en que la acturía reciba el acuerdo que los ordene. Los que se reciban se proveerán dentro de los tres días siguientes a su recepción y se diligenciarán dentro de los cinco días siguientes, a no ser que lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo, caso en el cual, la Sala requerida fijará el plazo que crea conveniente, el cual no podrá exceder de treinta días.

Artículo 120.- Una vez diligenciado el exhorto, la Sala requerida, sin más trámite, deberá remitirlo con las constancias que acrediten el debido cumplimiento de la diligencia practicada en auxilio de la Sala requirente.

Capítulo V De los Impedimentos y Excusas

Artículo 121.- los magistrados del Tribunal estarán impedidos para conocer, cuando:

- I. Tengan interés personal en el negocio.
- II. Sean cónyuges, parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes o de sus patronos o representantes, en línea recta sin limitación de grado y en línea transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y segundo por afinidad.
- III. Hayan sido patronos o apoderados en el mismo negocio.
- IV. Tengan amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o con sus patronos o representantes.
- V. Hayan dictado la resolución o acto impugnados o han intervenido con cualquier carácter en la emisión del mismo o en su ejecución.

- VI.- Figuren como parte en un juicio similar, pendiente de resolución.
- VII. Estén en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas.

Artículo 122.- Los magistrados tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el Artículo anterior, expresando concretamente en qué consiste el impedimento.

Manifestada por un magistrado la causa de impedimento, el Presidente de la Sala turnará el asunto al Presidente del Tribunal, a fin de que la califique y, de resultar fundada, sea turnada a la otra sala del Tribunal.

Capítulo VI De la Improcedencia y del Sobreseimiento

Artículo 123.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

- I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante.
- II. Que no le competa conocer al Tribunal.
- III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas.
- IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley.

Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada.

- V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal.
- VI. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa.
- VII. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía.

Para los efectos de esta fracción, se entiende que hay conexidad siempre que concurren las causas de acumulación previstas en el Artículo 136 de esta Ley.

- VIII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial.
- IX. Contra reglamentos.
- X. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.
- XI. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnado.
- XVI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa.

La procedencia del juicio será examinada aun de oficio.

Artículo 124.- Procede el sobreseimiento:

- I. Por desistimiento del demandante.
- II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el Artículo anterior.
- III. En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el proceso.
- IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante.
- V. Si el juicio queda sin materia.
- VI. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo.

El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial.

Título II **De la Substanciación y Resolución del Juicio**

Capítulo I **De la Demanda**

Artículo 125.- La demanda se presentará por escrito directamente ante la oficialía de partes del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa dentro de los plazos que a continuación se indican:

- I. De treinta días siguientes a aquel en el que se dé alguno de los supuestos siguientes:

- a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.
 - b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa.
- II. De treinta días siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de la resolución de la Sala que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello deberá prevenir al promovente para que presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo.
 - III. De cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.

Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la sede del Tribunal la demanda podrá presentarse en la oficialía de partes común del Poder Judicial o de los Juzgados Civiles, quienes la remitirán inmediatamente al Tribunal.

Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se suspenderá hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión.

En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación.

Artículo 126.- La demanda deberá indicar:

- I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio Estado.
- II. La resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, precisará la fecha de su publicación.
- III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa.
- IV. Los hechos que den motivo a la demanda.
- V. Las pruebas que ofrezca.

En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial se precisarán los hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos.

En caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá ofrecer también el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada.

Se entiende por expediente administrativo el que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la resolución impugnada. La remisión del expediente administrativo no incluirá las documentales privadas del actor, salvo que las especifique como ofrecidas. El expediente administrativo será remitido en un solo ejemplar por la autoridad, el cual estará en la Sala correspondiente a disposición de las partes que pretendan consultarlo.

VI. Los conceptos de impugnación.

VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya.

VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda.

En cada escrito de demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en un solo escrito.

El escrito de demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Magistrado Ponente requerirá a los promoventes para que en el plazo de cinco días presenten cada uno de ellos su demanda correspondiente, apercibidos que de no hacerlo se desechará la demanda inicial.

Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI, el Magistrado Ponente desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el Magistrado Ponente requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.

En el supuesto de que no se señale domicilio del demandante para recibir notificaciones conforme a lo dispuesto en la fracción I de este Artículo o se desconozca el domicilio del tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada, que se fijará en sitio visible de la propia Sala.

Artículo 127.- El demandante deberá adjuntar a su demanda:

- I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.
- II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio.

- III. El documento en que conste la resolución impugnada.
- IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.
- V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.
- VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Tribunal procederá conforme a lo previsto en el Artículo 129 fracción V, de esta Ley. Si durante el plazo previsto en el Artículo 129 citado no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución.
- VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante.
- VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del Artículo 44 de esta Ley.
- IX. Las pruebas documentales que ofrezca.

Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que fueron considerados en el procedimiento administrativo como información confidencial o comercial reservada. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias.

Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado Ponente requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

Artículo 128.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes:

- I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció.

- II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda.
- III. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa.

Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución.

Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida.

Artículo 129.- Se podrá ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:

- I. Cuando se impugne una negativa ficta.
- II. Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación.
- III. En los casos previstos en el Artículo anterior.
- IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del Artículo 137, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.
- V. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda.

En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que en su caso se presenten.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente, lo dispuesto en la parte conducente del Artículo 127 de esta Ley.

Si no se adjuntan las copias a que se refiere este Artículo, el Magistrado Ponente requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si el promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX del Artículo 127 de esta Ley, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

Artículo 130.- El tercero interesado, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se le corra traslado de la demanda, podrá apersonarse en juicio mediante escrito que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación, según sea el caso, así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto.

Deberá adjuntar a su escrito, el documento en que se acredite su personalidad cuando no gestione en nombre propio, las pruebas documentales que ofrezca y el cuestionario para los peritos. Son aplicables en lo conducente los tres últimos párrafos del Artículo 127.

Capítulo II De la Suspensión

Artículo 131.- El demandante podrá solicitar en cualquier tiempo, desde el escrito de inicio y hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cumpliendo con los siguientes requisitos.

- I. Solicitarla por escrito acompañando copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión.
- II. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se garantiza su importe ante la instancia competente, en alguna de las formas siguientes:
 - a) Depósito en efectivo;
 - b) Prenda o hipoteca;
 - c) Embargo en bienes; o
 - d) Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite su solvencia con bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad. Los fiadores deberán renunciar expresamente al procedimiento administrativo de ejecución.

La suspensión dejará de surtir efecto si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido.

- III. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:
 - a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y
 - b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, el Magistrado Ponente podrá dictar la suspensión provisional para preservar el medio de subsistencia del particular.

- IV. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuales considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite.
- V. La suspensión se tramitará por cuerda separada, de acuerdo a las reglas de los incidentes.
- VI. El Magistrado Ponente, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:
 - a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable.
 - b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y
 - c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado.
- X. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado por las autoridades demandadas mediante el recurso de revisión previsto en el Artículo 173 de esta Ley, dejando a salvo los derechos del demandante para que lo impugne en la vía que corresponda.
- XI. En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado Ponente o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme.
- XII. Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.
- XIII. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada.

Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero interesado, y previo acreditamiento que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el Tribunal.

Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia ante la sala, quien dará vista a las demás partes por un término de cinco días siguientes, en la que dictará el acuerdo que corresponda.

XIV. Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la Autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida.

Artículo 132.- En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio.

Para que surta efecto la suspensión el demandante deberá otorgar la garantía que señale el Magistrado Ponente.

Cuando con la suspensión puedan afectar derechos de terceros, no estimables en dinero, el Magistrado Ponente que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

Artículo 133.- La suspensión otorgada conforme al Artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero interesado da a su vez caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al demandante en el caso de que éste obtenga sentencia favorable.

Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero interesado, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el demandante.

Capítulo III De la Contestación

Artículo 134.- Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento; de igual forma se correrá traslado al tercero interesado para que comparezca a juicio en términos del Artículo 130. El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá individualmente.

Artículo 135.- El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda, expresará:

- I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar.
- II. Las consideraciones que, a su juicio, impidan se emita decisión en cuanto al fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda.

- III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso.
- IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación.
- V. Los argumentos por medio de los cuales desvirtúe el derecho a indemnización que solicite la actora.
- VI. Las pruebas que ofrezca.
- VII. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas.

Artículo 136.- El demandado deberá adjuntar a su contestación:

- I. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y para el tercero interesado señalado en la demanda.
- II. El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea un particular y no gestione en nombre propio.
- III. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandado.
- IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida por el demandante.
- V. Las pruebas documentales que ofrezca.

Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar también los documentos previstos en este Artículo, excepto aquellos que ya se hubieran acompañado al escrito de contestación de la demanda.

Para los efectos de este Artículo será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el Artículo 127.

Las autoridades demandadas deberán señalar, sin acompañar, la información calificada por la Ley de Comercio Exterior como gubernamental confidencial o la información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades que en materia de operaciones entre partes relacionadas establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.

Artículo 137.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

En caso de resolución negativa ficta, la autoridad demandada o la facultada para contestar la demanda, expresará los hechos y el derecho en que se apoya la misma.

En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada.

Capítulo IV De los Incidentes

Artículo 138.- En el juicio contencioso administrativo sólo serán de previo y especial pronunciamiento:

- I. El de acumulación de juicios.
- II. El de nulidad de notificaciones.
- III. La recusación por causa de impedimento.
- IV. La reposición de autos.
- V. La interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad.

Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente, se impondrá a quien lo promueva una multa de diez a cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado.

Artículo 139.- Procede la acumulación de dos o más juicios pendientes de resolución en los casos en que:

- I. Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios.
- II. Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, el acto impugnado sea uno mismo o se impugne varias partes del mismo acto.
- III. Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos o resoluciones que sean unos antecedentes o consecuencia de los otros.

Artículo 140.- La acumulación se solicitará ante el Magistrado Ponente que esté conociendo del juicio en el cual la demanda se presentó primero, para lo cual en un término que no exceda de seis días solicitará el envío de los autos del juicio. El magistrado que conozca de la acumulación, en el plazo de cinco días, deberá formular proyecto de resolución que someterá a la Sala, la que dictará la determinación que proceda. La acumulación podrá tramitarse de oficio.

Artículo 141.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en este Libro serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquel en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad.

Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano.

Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución.

Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el Estado. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia.

Artículo 142.- Las partes podrán recusar a los magistrados o a los peritos del Tribunal, cuando estén en alguno de los casos de impedimento a que se refiere el Artículo 121 de esta Ley.

La recusación de magistrados se promoverá mediante escrito que se presente en la Sala en la que se halle adscrito el magistrado de que se trate, acompañando las pruebas que se ofrezcan. El Presidente de la Sala, dentro de los cinco días siguientes, enviará al Presidente del Tribunal el escrito de recusación junto con un informe que el magistrado recusado debe rendir, a fin de que se someta el asunto al conocimiento del Pleno. A falta de informe se presumirá cierto el impedimento. Si el Pleno del Tribunal considera fundada la recusación, el magistrado de la Sala será sustituido el Secretario de Acuerdos del Tribunal.

Los magistrados que conozcan de una recusación son irrecusables para ese solo efecto.

Artículo 143.- Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se podrá hacer valer ante el Magistrado Ponente hasta antes de que se cierre la instrucción en el juicio. El incidente se substanciará conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 146 de esta Ley.

Si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento firmado por otra, el Magistrado Ponente podrá citar a la parte respectiva para que estampe su firma en presencia del secretario misma que se tendrá como indubitable para el cotejo.

En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, el incidentista deberá acompañar el documento que considere como indubitado o señalar el lugar donde se encuentre, o bien ofrecer la pericial correspondiente; si no lo hace, el Magistrado Ponente desechará el incidente.

La Sala resolverá sobre la autenticidad del documento exclusivamente para los efectos del juicio en el que se presente el incidente.

Artículo 144.- Las partes o el Magistrado Ponente de oficio, solicitarán se substancie el incidente de reposición de autos, para lo cual se hará constar en el acta que para tal efecto se levante por la Sala, la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones faltantes. A partir de la fecha de esta acta, quedará suspendido el juicio y no correrán los términos.

Con el acta se dará vista a las partes para que en el término de diez días prorrogables exhiban ante el instructor, en copia simple o certificada, las constancias y documentos relativos al expediente que obren en su poder, a fin de reponerlo. Una vez integrado, la Sala, en el plazo de cinco días, declarará repuestos los autos, se levantará la suspensión y se continuará con el procedimiento.

Cuando la pérdida ocurra encontrándose los autos a disposición del pleno, se ordenará a la Sala correspondiente proceda a la reposición de autos y una vez integrado el expediente, se remitirá el mismo al pleno para la resolución del juicio.

Artículo 145.- La interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia durará como máximo un año y se sujetará a lo siguiente:

- I. Se decretará por el Magistrado Ponente a partir de la fecha en que ésta tenga conocimiento de la existencia de alguno de los supuestos a que se refiere este Artículo.
- II. Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no comparece el albacea, el representante legal o el tutor, la Sala ordenará la reanudación del juicio, ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista al representante de la sucesión, de la sociedad en disolución, del ausente o del incapaz, según sea el caso.

Artículo 146.- Cuando se promueva alguno de los incidentes previstos en el Artículo 138, se suspenderá el juicio en el principal hasta que se dicte la resolución correspondiente.

Los incidentes a que se refieren las fracciones I, y III, del Artículo 138 citado, únicamente podrán promoverse hasta antes de que quede cerrada la instrucción, en los términos del Artículo 154 de esta Ley.

Cuando se promuevan incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento, continuará el trámite del proceso.

Si no está previsto algún trámite especial, los incidentes se substanciarán corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de tres días. Con el escrito por el que se promueva el incidente o se desahogue el traslado concedido, se ofrecerán las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas pericial y testimonial las reglas relativas del principal.

Capítulo V De las Pruebas

Artículo 147.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el demandante que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus excepciones.

En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absoluciones de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga.

Artículo 148.- El Magistrado Ponente, hasta antes de que se cierre la instrucción, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes.

El magistrado, en su caso, propondrá a la Sala respectiva, reabrir la instrucción para los efectos señalados anteriormente.

Artículo 149.- Las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

Artículo 150.- La prueba pericial se sujetará a lo siguiente:

- I. En el acuerdo que recaiga a la contestación de la demanda o de su ampliación, se requerirá a las partes para que dentro del plazo de diez días presenten a sus peritos, a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal desempeño, apercibiéndolas de que si no lo hacen sin justa causa, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos de ley, sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplimentado el requerimiento.
- II. El Magistrado Ponente, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y lo permita la naturaleza de ésta, señalará lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial, pudiendo pedir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes, y exigirles la práctica de nuevas diligencias.
- III. En los acuerdos por los que se discierna del cargo a cada perito, el Magistrado Ponente concederá un plazo mínimo de quince días para que rinda y ratifique su dictamen, con el apercibimiento a la parte que lo propuso de que únicamente se considerarán los dictámenes rendidos dentro del plazo concedido.
- IV. Por una sola vez y por causa que lo justifique, comunicada al instructor antes de vencer los plazos mencionados en este Artículo, las partes podrán solicitar la ampliación del plazo para rendir el dictamen o la sustitución de su perito, señalando en este caso, el nombre y domicilio de la nueva persona propuesta. La parte que haya sustituido a su perito conforme a la fracción I, ya no podrá hacerlo en el caso previsto en la fracción III de este precepto.
- V. El perito tercero será designado por la Sala, debiendo cubrirse sus honorarios por las partes. En el auto en que se designe perito tercero, se le concederá un plazo de quince días para que rinda su dictamen.

Artículo 151.- Para desahogar la prueba testimonial se requerirá a la oferente para que presente a los testigos y cuando ésta manifieste no poder presentarlos, el Magistrado Ponente los citará para que comparezcan el día y hora que al efecto señale. De los testimonios se levantará acta pormenorizada y podrán serles formuladas por el magistrado o por las partes aquellas preguntas que estén en relación directa con los hechos controvertidos o persigan la aclaración de cualquier respuesta. Las autoridades rendirán testimonio por escrito.

Cuando los testigos tengan su domicilio fuera de la sede de la Sala, se podrá desahogar la prueba mediante exhorto, previa calificación hecha por el Magistrado del interrogatorio presentado, pudiendo repreguntar el magistrado o juez que desahogue el exhorto en términos de los Artículos 118, 119 y 120.

Artículo 152.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera con esa obligación la parte interesada solicitará al Magistrado Ponente que requiera a los omisos.

Cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida las copias de los documentos ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a aquélla y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos.

En los casos en que la autoridad requerida no sea parte e incumpla, el Magistrado Ponente podrá hacer valer como medida de apremio la imposición de una multa por el monto equivalente de entre noventa y ciento cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado, al funcionario omiso. También podrá comisionar al Secretario o Actuario que deba recabar la certificación omitida u ordenar la compulsión de los documentos exhibidos por las partes, con los originales que obren en poder de la autoridad.

Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la práctica administrativa normal, las autoridades podrán solicitar un plazo adicional para realizar las diligencias extraordinarias que el caso amerite y si al cabo de éstas no se localizan, el Magistrado Ponente podrá considerar que se está en presencia de omisión por causa justificada.

Artículo 153.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones:

I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas respectivas.

III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente apreciación de la Sala.

Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la Sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia.

Capítulo VI Del Cierre de la Instrucción

Artículo 154.- El Magistrado Ponente, cinco días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de tres días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia.

Al vencer el plazo de tres días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare cerrada la instrucción.

Capítulo VII De la Sentencia

Artículo 155.- La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la Sala, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción en el juicio. Para este efecto el Magistrado Ponente formulará el proyecto respectivo dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se dictó dicho acuerdo. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el Artículo 124 de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de cinco días.

Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados de la Sala, el magistrado ponente engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar como voto particular.

Artículo 156.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del demandante que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre

la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.

En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.

Artículo 157.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

- I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.
- II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.
- III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.
- IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.
- V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.

Artículo 158.- Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del Artículo anterior, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:

- I. Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden.
- II. Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse.
- III. Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal.
- IV. Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados.

- V. Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsión a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados.
- VI. Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.

El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.

Artículo 159.- La sentencia definitiva podrá:

- I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.
- II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.
- III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación.
- IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del Artículo 157 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa.

En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento.

Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma.

- V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:
 - a) Reconocer al demandante la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa.
 - b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados.
 - c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate.

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme, dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva.

Transcurrido el plazo establecido en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, recluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo.

En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

Artículo 160.- La sentencia definitiva queda firme cuando:

- I. No admita en su contra recurso o juicio.
- II. Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado infundado, y
- III. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

Cuando haya quedado firme una sentencia que deba cumplirse en el plazo establecido por el Artículo 159 de esta Ley, el secretario de acuerdos que corresponda, hará la certificación de tal circunstancia y fecha de causación y el Magistrado Ponente, en su caso, ordenará se notifique a las partes la mencionada certificación.

Artículo 161.- La parte que estime contradictoria, ambigua u oscura una sentencia definitiva del Tribunal, podrá promover por una sola vez su aclaración dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos su notificación.

La instancia deberá señalar la parte de la sentencia cuya aclaración se solicita e interponerse ante la Sala que dictó la sentencia, la que deberá resolver en un plazo de cinco días siguientes a la fecha en que fue interpuesto, sin que pueda variar la sustancia de la sentencia. La aclaración no admite recurso alguno y se reputará parte de la sentencia recurrida y su interposición interrumpe el término para su impugnación.

Artículo 162.- Las partes podrán formular excitativa de justicia ante el Presidente del Tribunal, si el magistrado responsable no formula el proyecto respectivo dentro del plazo señalado en esta Ley.

Artículo 163.- Recibida la excitativa de justicia, el Presidente del Tribunal, solicitará informe al magistrado responsable que corresponda, quien deberá rendirlo en el plazo de cinco días. El Presidente, si encuentra fundada la excitativa, otorgará un plazo que no excederá de quince días para que el magistrado formule el proyecto respectivo.

En el supuesto de que la excitativa se promueva por no haberse dictado sentencia, a pesar de existir el proyecto del magistrado responsable, el informe a que se refiere el párrafo anterior, se pedirá al Presidente de la Sala, para que lo rinda en el plazo de tres días, y en el caso de que el Pleno considere fundada la excitativa, concederá un plazo de diez días a la Sala para que dicte la sentencia.

Capítulo VIII Del Cumplimiento de la Sentencia

Artículo 164.- Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, conforme a lo siguiente:

- I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales:
 - a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana.
 - b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.

En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva.

Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada.

Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana.

- c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada.

Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos.

- d) Cuando prospere la incompetencia, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia

ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia.

- II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva. En ningún caso el plazo será inferior a un mes.

Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

Los plazos para el cumplimiento de sentencia que establece este Artículo, empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa informe a la autoridad que no se interpuso el juicio de amparo en contra de la sentencia, o el particular informe a la autoridad, bajo protesta de decir verdad, que no interpuso en contra de la sentencia, dicho juicio. La autoridad, dentro del plazo de 20 días posteriores a la fecha en que venció el término de 15 días para interponer el juicio de amparo, deberá solicitar al Tribunal el informe mencionado.

En el caso de que la autoridad no solicite el informe mencionado dentro del plazo establecido, el plazo para el cumplimiento de la resolución empezará a correr a partir de que hayan transcurrido los 15 días para interponer el juicio de amparo.

Artículo 165.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el Artículo 159 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a los Artículos siguientes.

Artículo 166.- La Sala que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso.

Artículo 167.- Concluido el término señalado en el Artículo anterior con informe o sin él, la Sala, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue:

- I. Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Estado, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de esta fracción, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada.
- II. Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora.

De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por la fracción I.

- III. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala podrá comisionar al funcionario judicial que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia.

Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida.

- IV. Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Secretaria de la Contraloría o de la Contraloría Interna, o al Síndico Municipal correspondiente los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento.

Capítulo IX Del Procedimiento de Queja

Artículo 168.- Por incumplimiento de las autoridades respecto a las sentencias dictadas por el Tribunal puede interponerse el procedimiento de Queja el cual Procederá en contra de:

- I.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia.
- II.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los Artículos 159 y 164, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del Artículo 159 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso.
- III.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.
- IV.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo.

La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en la Fracción III, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia.

Artículo 169.- Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en la fracción III del Artículo anterior, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho.

En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto.

El Magistrado Ponente, ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará a la Sala, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 170.- En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala, hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones.

Además, al resolver la queja, la Sala impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, del Artículo 167 de esta ley.

Si la Sala resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir.

Si la Sala comprueba que la resolución a que se refiere la fracción II del Artículo 168, se emitió después de concluido el plazo legal, ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta para el inicio del procedimiento de responsabilidad respectivo.

En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo.

Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere.

Artículo 171.- Tratándose del incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento ante el instructor.

En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que se ha dado el incumplimiento a la suspensión otorgada, y si los hay, los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad en que pretenda la ejecución del acto.

El magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la sentencia interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días.

Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento de la suspensión otorgada, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión.

La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior del funcionario responsable, entendiéndose por éste al que incumpla la suspensión decretada, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al funcionario responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de quince días de su salario, sin exceder del equivalente a cuarenta y cinco días del mismo.

Artículo 172.- A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiéndose por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga.

Existiendo resolución administrativa definitiva, si la Sala considera que la queja es improcedente, prevendrá al quejoso para que dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, la presente como demanda, cumpliendo los requisitos previstos por los artículos 125 y 126 de esta Ley, ante la misma Sala que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Ponente de la queja.

Título III Del Recurso de Revisión

Artículo 173.- El recurso de revisión procederá en contra de las resoluciones de las salas que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado y las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva.

La revisión se interpondrá ante la Sala dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de que se trate.

Artículo 174.- En el escrito con que se interpone el recurso se hará expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes que intervienen en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del término de diez días, comparezcan por escrito ante el Pleno del Tribunal a defender sus derechos.

Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las omitidas, dentro del término de tres días; si no las exhibiere, se tendrán por no interpuesto el recurso.

En todos los casos a que se refiere este Artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de diez días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

Cuando la revisión se interponga en contra del acuerdo que sobresea el juicio antes de que se hubiera cerrado la instrucción, en caso de desistimiento del demandante, no será necesario dar vista a la contraparte.

Artículo 175.- Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios, la sala remitirá el expediente original al pleno, dentro del término de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios.

En los casos de las sentencias interlocutorias que concedan o nieguen la suspensión definitiva, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse, con el original del escrito de expresión de agravios, dentro del término de veinticuatro horas al Pleno.

Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Pleno, copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de

sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión con expresión de la fecha y hora del recibo.

El Pleno del Tribunal, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo.

Artículo 176.- El Pleno, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

- I.- Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.
- II.- Sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la sala que conozca o haya conocido del juicio del juicio contencioso; así como de la resolución recurrida.
- III.- Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por la sala, para sobreseer el juicio contencioso después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, y
- IV.- Si en la revisión de una sentencia, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio contencioso, o que la sala, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiese influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley.

Título IV De los Criterios

Capítulo Único

Artículo 177.- Los Criterios sustentados en las sentencias pronunciadas por el Pleno del Tribunal, aprobados por lo menos por cinco magistrados, constituirán precedente una vez publicados en el medio de difusión oficial del Tribunal.

Artículo 178.- Para fijar Criterios, el Pleno deberá aprobar tres precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario.

Artículo 179.- En el caso de contradicción de Criterios, cualquiera de los Magistrados del Tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán denunciarla ante el Presidente del Tribunal para que éste la haga del conocimiento del Pleno, el cual con un quórum mínimo de cinco Magistrados, decidirá por mayoría de tres la que debe prevalecer, constituyendo Criterio.

La resolución que pronuncie el Pleno del Tribunal, en los casos a que este Artículo se refiere, sólo tendrá efectos para fijar Criterios y no afectará las resoluciones dictadas en los juicios correspondientes.

Artículo 180.- El Pleno podrá suspender un Criterio, cuando en una sentencia o en una resolución de contradicción de sentencias, resuelva en sentido contrario al Criterio. Dicha suspensión deberá publicarse en el medio de difusión oficial del Tribunal.

El presidente de la Sala podrá proponer al Pleno que suspenda el Criterio, cuando haya razones fundadas que lo justifiquen, a fin de que la someta a la consideración del Pleno.

La suspensión de un Criterios termina cuando se reitere éste en tres precedentes de Pleno, salvo que el origen de la suspensión sea jurisprudencia en contrario del Poder Judicial Federal y éste la cambie. En este caso, el Presidente del Tribunal lo informará al Pleno para que éste ordene su publicación.

Artículo 181.- Las Salas del Tribunal están obligadas a aplicar los Criterios del Pleno, salvo que ésta contravenga jurisprudencia del Poder Judicial Federal.

Cuando se conozca que una Sala del Tribunal dictó una sentencia contraviniendo los Criterios, el Presidente del Tribunal solicitará a los Magistrados que hayan votado a favor de dicha sentencia un informe, para que éste lo haga del conocimiento del Pleno y, una vez confirmado el incumplimiento, el Pleno del Tribunal los apercibirá. En caso de reincidencia se les aplicará la sanción administrativa que corresponda en los términos de la ley de la materia.

Transitorios

Primero.- La presente ley entrará en vigencia el primero de Enero del año dos mil ocho.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley; así como, los recursos administrativos previstos en los diferentes ordenamientos administrativos, en las materias reguladas por este ordenamiento.

Los recursos y procedimientos administrativos en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, se resolverán conforme a las disposiciones administrativas vigentes hasta antes de la entrada en vigencia de la presente ley.

Tercero.- Los juicios de nulidad que a la entrada en vigencia de la presente Ley se estén tramitando ante la Magistratura Superior del Estado, se continuarán regulando conforme a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas.

Cuarto.- Con las salvedades previstas en los Artículos transitorios que anteceden, se abroga la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas.

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y se dé debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los días 27 del mes de diciembre del año dos mil siete.- D. P. Dip. José Ángel Córdova Toledo.- D. S. Dip. Rafael Ceballos Cancino.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del Artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil siete.

Juan Sabinés Guerrero, Gobernador del Estado, Jorge Antonio Morales Messner, Secretario de Gobierno.-
Rúbricas.

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 109

Juan Sabinés Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 109

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

C o n s i d e r a n d o

La fracción I, del artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al Honorable Congreso del Estado, a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes federales.

Desde el inicio del actual Gobierno se tomó como prioridad, la instrumentación de políticas y acciones que permitan la modernización integral y permanente de las acciones concernientes a las entidades y dependencias que integran la administración pública, a fin de optimizar las tareas encargadas al Poder Ejecutivo, acorde a la realidad de nuestra entidad y con el firme propósito de satisfacer eficazmente las necesidades y expectativas de la población.

En este contexto y preocupados por la problemática del calentamiento global del planeta y sus efectos negativos, así como del inminente agotamiento del petróleo como fuente energética tanto en nuestro país como en el mundo, existe la imperiosa necesidad de coadyuvar en el mejoramiento del medio ambiente y desarrollar fuentes de energías alternativas, aprovechando las condiciones agroecológicas excepcionales de nuestra entidad.

En busca de un desarrollo sustentable e integral de nuestro Estado se requiere de alternativas productivas y de transformación que ante la necesidad de energías alternativas, generen

empleo, se aproveche mejor las tierras agropecuarias y forestales, la energía hidráulica, solar, eólica, marítima, entre otras, fomentando la participación y colaboración de los sectores sociales, y privados, local, nacional e internacional, para el desarrollo de los bioenergéticos y energías alternativas.

En tal orden de ideas el Poder Ejecutivo, creó la Comisión de Bioenergéticos del Estado de Chiapas, la cual ha sentado las bases para ampliar y profundizar el desarrollo de fuentes de energías alternativas, en el Estado, y la cual es necesario redefinir y crear como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos.

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido a bien emitir el siguiente Decreto de:

**«Ley Orgánica del Instituto de Bioenergéticos y
Energías Alternativas del Estado de Chiapas»**

**Título Primero
Disposiciones Generales**

**Capítulo I
De la Creación, Domicilio y Personalidad
Jurídica del Instituto**

Artículo 1.- Se crea el Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas, en adelante el Instituto, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos mismo que atenderá los asuntos que este instrumento, su Reglamento Interior y demás normatividad aplicable le señalen.

Artículo 2.- El Instituto tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde establecerá su oficina principal, pudiendo instituir otras oficinas alternas en los diversos Municipios del Estado, para el cumplimiento de su objeto.

**Capítulo II
De su Objeto y Atribuciones Generales**

Artículo 3.- El Instituto tendrá como objeto coadyuvar al desarrollo de la Entidad y del País, mediante la producción y uso de los productos bioenergéticos, energías alternativas y renovables, fomentando la inversión, participación y organización social, privada y pública para un desarrollo sostenible, así como, para lograr una autosuficiencia energética y una cultura de la conservación de recursos no renovables y uso de tecnologías y productos limpios no contaminantes y de impacto positivo en el medio climático mundial.

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá de manera general, entre otras, las atribuciones siguientes:

- I. Diseñar, formular, aprobar y ejecutar las políticas públicas para impulsar la producción, organización, desarrollo de agroindustria, industria, comercialización, financiamiento y uso de productos bioenergéticos y de energías alternativas, así como, promover la investigación y transferencia tecnológica en esta materia y coadyuvar al desarrollo de una cultura bioenergética y ambiental.
- II. Promover la integración y el funcionamiento de un foro consultivo multidisciplinario de bioenergéticos y energías alternativas.
- III. Promover y apoyar la integración y desarrollo de las sociedades bioenergéticas en la entidad.
- IV. Promover y apoyar a los inversionistas privados y sociales.
- V. Las demás que le señale el presente decreto, las leyes y reglamentos que le resulten aplicables.

Capítulo III De la Integración de su Patrimonio

Artículo 5.- Para su funcionamiento, el Instituto contará con los bienes muebles e inmuebles destinados para el cumplimiento de sus atribuciones, así como, con los recursos que le sean asignados por el Ejecutivo Federal y Estatal de conformidad con las asignaciones presupuestales correspondientes.

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrá constituirse gravamen de ninguna naturaleza; sin embargo, de estos bienes podrá percibir ingresos provenientes de actividades derivadas del uso de los mismos.

Artículo 6.- El Instituto, contará con patrimonio propio que estará integrado por:

- I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación en los programas, proyectos y acciones que le están encomendadas al Instituto de acuerdo a su objeto.
- II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiriera, o los que en el futuro aporten o afecten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones u organismos públicos o privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras.
- III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o privadas o personas físicas o morales.
- IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos y los aprovechamientos que obtenga por las operaciones que realice o que le correspondan por cualquier título legal.
- V. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales.

- VI. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio.
- VII. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione.
- VIII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario.
- IX. Cualquiera otra percepción de la cual el organismo resulte beneficiario.

Capítulo IV De su Integración

Artículo 7.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto contará con los siguientes órganos:

- I. La Junta de Gobierno.
- II. La Dirección General.

Además, y para el desarrollo de sus atribuciones, el Instituto se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que apruebe la Junta de Gobierno, con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal, cuyas atribuciones se determinarán en su Reglamento Interior.

Artículo 8.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo del Instituto, se regirá por las disposiciones de este Decreto y lo que determine el Reglamento Interior, será la instancia responsable de fijar las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, evaluando sus resultados operativos, administrativos, financieros, y de manera general, el desarrollo de sus actividades.

Artículo 9.- La Junta de Gobierno del Instituto, estará integrada por:

- I. Un Presidente, que será el Secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos.
- II. Un Secretario Técnico que será el Coordinador Operativo del Instituto.
- III. 5 vocales que serán:
 - A) EL Secretario de Finanzas.
 - B) El Secretario de Administración.
 - C) El Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable.
 - D) El Secretario de Desarrollo Social.
 - E) El Secretario del Campo.

Asimismo, asistirán como invitados permanentes a las reuniones de la Junta de Gobierno tres Representantes de las Sociedades Bioenergéticas y dos Secretarios del foro de Bioenergéticos y Energías Alternativas, quienes tendrán derecho a voz pero sin voto en las reuniones de la Junta de Gobierno.

Artículo 10.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto, y podrá designar a un suplente para que lo represente en las sesiones de la Junta, quien tendrá las mismas facultades de éste, y deberá tener nivel jerárquico mínimo de director de área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado mediante oficio dirigido a la Junta.

Los cargos a que se refieren el artículo anterior, así como, sus representantes suplentes, tendrán el carácter de honoríficos y las personas que los desempeñen no devengarán salario o compensación alguna.

El Director General podrá participar en las sesiones de la Junta de Gobierno, y contará con derecho a voz pero no a voto.

Artículo 11.- La Junta de Gobierno, celebrará sesiones ordinarias por lo menos cada tres meses, y extraordinarias cuantas veces sea necesario y así lo convoque el Presidente de la Junta o el Secretario Técnico, por instrucciones de éste.

El Presidente de la Junta, directamente o a través del Secretario Técnico, podrá invitar a las sesiones de ésta, cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, de Instituciones Públicas, del sector social y privado, siempre que sus actividades estén relacionadas con el objeto del Instituto, los cuales tendrán derecho a voz pero no a voto, en las sesiones en que participen como invitados.

Artículo 12.- La Junta podrá celebrar sesiones y los acuerdos que en ellas se tomen serán validos, con la participación de más de la mitad del número total de sus integrantes.

Artículo 13.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno, se aprobarán por la mayoría de votos de los miembros presentes y serán ejecutados por la Dirección General, en caso de empate, tendrá voto de calidad el Presidente de la Junta o su representante.

Artículo 14.- La Junta de Gobierno podrá integrar Comités Técnicos para el estudio y propuesta de mecanismos de coordinación interinstitucional en la atención de las tareas asistenciales que realice. Los Comités estarán formados por los representantes que al efecto designen las dependencias y entidades competentes.

Capítulo V

De las Atribuciones de la Junta de Gobierno y del Director General

Artículo 15.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:

- I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo que anualmente le sean presentados por la Dirección General y que orienten las actividades del Instituto, definiendo las prioridades a las que debe sujetarse.

- II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que someta a su consideración la Dirección General, así como, sus modificaciones, en términos de la legislación aplicable.
- III. Analizar y aprobar en su caso, el balance anual y los estados financieros, así como, los informes generales y especiales que rinda la Dirección General.
- IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y el ejercicio del presupuesto anual supervisando el avance de las actividades y el apego a la normatividad aplicable.
- V. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre la Dirección General, que impliquen traslación de dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los objetivos del Instituto.
- VI. Determinar el presupuesto de la Coordinación de Enlace del Instituto.
- VII. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto, así como, sus modificaciones y, remitirlo al Titular del Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondientes.
- VIII. Aprobar el organigrama y los manuales del Instituto, así como, la estructura organizacional y sus modificaciones, la creación o supresión de los órganos que lo integran, de conformidad con la normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal.
- IX. Vigilar la buena marcha del Instituto, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas para mejorar su funcionamiento.
- X. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones del Instituto, que por su importancia someta a su consideración el Director General.
- XI. Autorizar la contratación de despachos contables externos de acuerdo a la legislación vigente, para dictaminar los estados financieros del Instituto, y en su caso, aprobarlos.
- XII. Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse el Instituto, en la celebración de acuerdos, convenios y contratos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como, con los organismos del sector público, privado y social, nacionales o extranjeros, para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de creación del organismo.
- XIII. Vigilar el exacto cumplimiento de este Decreto y demás normas aplicables, pudiendo al efecto solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las obligaciones que les resulten.
- XIV. Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, mediante acuerdo que emita, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
- XV. Autorizar la creación de comités y subcomités de apoyo.
- XVI. Las demás que le señale el presente Decreto, su reglamento interior y los ordenamientos jurídicos o administrativos que le resulten aplicables.

Artículo 16.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:

- I. Realizar el seguimiento a las resoluciones y acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de Gobierno.
- II. Convocar por instrucciones del Presidente de la Junta de Gobierno, a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
- III. Participar en las sesiones de la Junta de Gobierno con voz y voto.
- IV. Dar lectura textual, levantar y elaborar el acta respectiva de las sesiones de la Junta de Gobierno, además, de recabar toda la documentación soporte de la misma, cuando así se requiera.
- V. Formalizar las invitaciones y elaborar el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno.
- VI. Vigilar y supervisar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por la Junta de Gobierno.
- VII. Vigilar que circulen con oportunidad entre los miembros de la Junta de Gobierno, las actas de las sesiones, el orden del día y la documentación que se deban conocer en las sesiones correspondientes.
- VIII. Registrar y firmar las actas, minutas de trabajos y acuerdos; además, de darle puntual seguimiento a las mismas.
- IX. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones realizadas.
- X. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno.
- XI. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a consideración de ésta.
- XII. Resguardar las actas de cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno, anexando además, el soporte documental correspondiente.
- XIII. Suscribir los documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta.
- XIV. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto y demás normatividad que le resulte aplicable.

Artículo 17.- El Director General será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado, y tendrá a su cargo la administración y representación del organismo descentralizado denominado Instituto.

Artículo 18.- El Director General tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:

- I. Representar legalmente al Instituto, ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales.

La representación a que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones, y constituye una representación amplísima.
- II. Formular y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los programas institucionales del Instituto, y ejecutar éstos una vez fueran aprobados.
- III. Representar a la Junta de Gobierno, ante toda clase de autoridades, instituciones gubernamentales y personas públicas y privadas.
- IV. Formular los programas, así como, el proyecto de Reglamento Interior y los manuales del Instituto, y sus modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno.
- V. Administrar y realizar las tareas operativas del Instituto, implementando las acciones necesarias para su buen funcionamiento.
- VI. Proponer para aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para cada ejercicio anual, así como, los estados financieros, e informes generales y especiales del Instituto.
- VII. Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente.
- VIII. Informar a la Junta de Gobierno, los avances en los programas, acciones, políticas y proyectos que lleve a cabo el Instituto.
- IX. Concurrir a las sesiones de la Junta de Gobierno, participando en ellas, con voz pero sin voto, y cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por ésta.
- X. Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios en representación del Instituto, que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, informando periódicamente a la Junta de Gobierno, sobre el resultado de los mismos.
- XI. Conducir las relaciones laborales del personal del Instituto, conforme a la legislación que resulte aplicable.
- XII. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto.
- XIII. Nombrar y remover al personal del Instituto, con base en el presupuesto autorizado, las necesidades que se generen para el cumplimiento de los objetivos y de conformidad con la legislación aplicable.

- XIV. Otorgar permisos y licencias, con y sin goce de sueldo al personal del Instituto, designado a quienes los sustituyan provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones administrativas que correspondan en términos de las disposiciones reglamentarias conducentes.
- XV. Para los efectos administrativos a que haya lugar, certificar en su caso, la documentación propia del Instituto, así como, toda aquella que obre en los archivos de la misma.
- XVI. Solicitar al Comisario, el examen y evaluación de los sistemas, mecanismos y procedimientos de control del Instituto, así como, solicitar la revisión y auditorias de índole administrativas, contables, operacionales, técnicas y jurídicas a las autoridades competentes, con la finalidad de vigilar y transparentar el manejo y la aplicación de los recursos públicos.
- XVII. Suscribir toda clase de contratos de trabajo, en representación del Instituto.
- XVIII. Delegar en servidores públicos subalternos, las atribuciones que le corresponden, excepto aquellas que su ejercicio sea personalísimo, por su naturaleza indelegable.
- XIX. Presentar a la Junta de Gobierno los informes relacionados con las actividades del Instituto.
- XX. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno del Instituto.
- XXI. Las demás que con este carácter y en el ámbito de su competencia le asignen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como, las que le confiera la Junta de Gobierno.

Capítulo VI Del Órgano de Vigilancia

Artículo 19.- El Instituto, contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público, que será designado y removido libremente por la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado, en términos de la legislación aplicable, quien deberá de llevar a cabo las funciones de vigilancia y control interno.

El Comisario evaluará la eficiencia con la que el Instituto, maneje y aplique los recursos públicos conforme a las disposiciones aplicables, solicitará información y efectuará los actos que requiera para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Contraloría General, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno, por cada sesión ordinaria.

El Comisario participará en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero sin voto.

Artículo 20.- Los órganos administrativos del Instituto proporcionarán al Comisario la información que les solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, normas, procedimientos y demás disposiciones se apliquen correctamente.

El Comisario deberá elaborar los informes derivados de las revisiones practicadas y proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas tendentes a mejorar la organización, funcionamiento y control interno del Instituto, estableciendo el seguimiento para su aplicación, por lo que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del organismo.

Capítulo VII De las Reglas de Gestión y De las Relaciones Laborales

Artículo 21.- El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable a la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Artículo 22.- Los planes y programas que lleve a cabo el Instituto, en el ejercicio de sus funciones, deberán ser acordes con los planes nacional y estatal de desarrollo.

Artículo 23.- El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo del Instituto, se ajustará a lo dispuesto en el Apartado «A», del Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su Ley Reglamentaria.

T r a n s i t o r i o s

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- La Junta de Gobierno del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas, celebrará sesión y deberá quedar instalada en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

Artículo Tercero.- Los compromisos adquiridos, los trámites iniciados, así como, los recursos humanos, materiales y financieros que a la entrada en vigor del presente Decreto, correspondían a la Comisión de Bioenergéticos del Estado de Chiapas, serán transferidos de inmediato al Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas.

Artículo Cuarto.- La Secretaría de Administración, la de Finanzas y la de Planeación y Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las acciones que sean necesarias para la creación y adecuaciones presupuestarias y de la estructura funcional del órgano que se crea.

Artículo Quinto.- La Junta de Gobierno deberá aprobar el Reglamento Interior del Instituto, en un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y remitirlo al Titular del Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondientes.

Artículo Sexto.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y se dé debido cumplimiento.

Dado en el salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 27 días del mes de Diciembre de dos mil siete.- D. P. C. José Ángel Córdova Toledo.- D. S. C. Rafael Ceballos Cancino.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil siete.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Jorge Antonio Morales Messner, Secretario de Gobierno.- Rúbricas.

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 110

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 110

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

C o n s i d e r a n d o

Que la fracción I del artículo 29, de la Constitución Política Local, faculta al Honorable Congreso del Estado, legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes Federales.

Al Ejecutivo Estatal, le compete iniciar las leyes que tengan por objeto mejorar la Administración Pública, generando las políticas que atiendan las necesidades de la población, fortaleciendo las instituciones públicas y los municipios de la Entidad.

En tal orden de ideas, fortalecer a los municipios es de trascendental importancia para el desarrollo del Estado. El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, a través de él, se brindan los servicios y satisfactores que inciden directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

Para poder llevar a cabo esta labor, los municipios requieren contar con los recursos públicos que permitan atender de manera eficaz sus funciones y competencias, los cuales primeramente devienen de su recaudación propia y de manera subsidiaria de las aportaciones que la Federación y el Estado, les hacen llegar en sus asignaciones presupuestarias.

En tal orden de ideas, es necesario fijar los mecanismos necesarios a fin de establecer las reglas para asignar adecuadamente en beneficio de los chiapanecos, los recursos provenientes de la Federación, así como de las aportaciones Estatales.

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido a bien emitir el siguiente:

Decreto por el que se Reforman y Adicionan la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2008, el Decreto que Contiene Bases, Coeficientes y Plazos para el Pago de Participaciones Fiscales Federales a los Municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2008, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, la Ley Estatal de Derechos, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Hacienda Municipal

Artículo Primero.- Se adicionan los artículos: 8 y 9, de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2008, para quedar como sigue:

Artículo 8.- Los propietarios de vehículos automotores en las modalidades de automóvil y camión del servicio particular, que hayan adquirido placas durante los meses de noviembre y diciembre del año 2007; al realizar el canje de placas 2008, gozarán de un descuento del 50% sobre el costo total de las mismas, siempre que éste, se efectúe durante el mes de marzo de 2008.

Artículo 9.- Los contribuyentes que realicen el canje de placas durante los meses de marzo y abril de 2008, gozarán sobre el importe de este derecho, una reducción del 20% y 10% respectivamente.

Esta reducción no se hará aplicable para aquellos contribuyentes que obtengan el descuento del 50%, otorgado en el artículo anterior.

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos: Segundo y Cuarto del Decreto que Contiene Bases, Coeficientes y Plazos para el Pago de Participaciones Fiscales Federales a los Municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2008, para quedar como siguen:

Artículo Segundo.- Para la distribución y pago de las Participaciones Fiscales Federales por Fondo General de Participaciones, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos e Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que corresponden a cada Municipio, se aplicarán, los coeficientes derivados de la fórmula establecida en el artículo 278 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, integrado por los coeficientes aplicados en el ejercicio 2007, para el pago de una parte equivalente a la recibida en ese mismo año, y el coeficiente derivado de la fórmula de distribución mencionada, en caso que hubieran montos excedentes a los recibidos por los municipios en el ejercicio 2007.

MUNICIPIO	COEFICIENTES 2008	
	2007	EXCEDENTES
1. Acacoyagua	0.47091	0.41833
2. Acala	0.56695	0.44105
3. Acapetahua	0.62589	0.39434
4. Aldama	0.14663	0.04260
5. Altamirano	0.63776	0.40154
6. Amatán	0.48369	0.41166
7. Amatenango de la Frontera	0.56077	0.48024
8. Amatenango del Valle	0.33692	0.22637
9. Angel Albino Corzo	0.46454	0.50941
10. Arriaga	1.13028	0.65578
11. Bejucal de Ocampo	0.31019	0.08850
12. Bella Vista	0.44937	0.31041
13. Benemérito de las Américas	0.29310	0.28343
14. Berriozábal	0.68707	0.71350
15. Bochil	0.51404	0.39005
16. Bosque, El	0.41536	0.19633
17. Cacahoatán	0.73936	0.69602
18. Catazajá	0.62135	0.28669
19. Chalchihuitán	0.41877	0.29183
20. Chamula	0.74375	1.48596
21. Chanal	0.34289	0.31759

MUNICIPIO	COEFICIENTES 2008	
	2007	EXCEDENTES
22. Chapultenango	0.30749	0.65493
23. Chenalhó	0.48021	0.52986
24. Chiapa de Corzo	1.13113	1.46043
25. Chiapilla	0.37714	0.08484
26. Chicoasén	0.29546	0.07345
27. Chicomuselo	0.70229	0.47479
28. Chilón	1.05046	2.59223
29. Cintalapa	1.35837	1.20736
30. Coapilla	0.35936	0.35442
31. Comitán de Domínguez	2.69793	2.74861
32. Concordia, La	0.71882	0.58531
33. Copainalá	0.52256	0.41330
34. Escuintla	0.68180	0.42166
35. Francisco León	0.31341	0.10063
36. Frontera Comalapa	0.90223	1.08532
37. Frontera Hidalgo	0.42811	0.38200
38. Grandeza, La	0.35845	0.15767
39. Huehuetán	0.66060	0.58041
40. Huitiupán	0.46870	0.32756
41. Huixtán	0.49725	0.23583
42. Huixtla	1.21785	0.78349
43. Independencia, La	0.63074	0.40542
44. Ixhuateán	0.35497	0.30865
45. Ixtacomitán	0.36904	0.12698
46. Ixtapa	0.50224	0.44470
47. Ixtapangajoya	0.34056	0.11811
48. Jiquipilas	0.82964	0.55933
49. Jitotol	0.40413	0.20400
50. Juárez	0.76415	0.25718
51. Larráinzar	0.38696	0.29711
52. Libertad, La	0.48963	0.08947
53. Mapastepec	0.88749	0.72835
54. Maravilla Tenejapa	0.28885	0.13695
55. Margaritas, Las	1.33279	1.62919
56. Marqués de Comillas	0.22024	0.12187
57. Mazapa de Madero	0.33913	0.20558
58. Mazatán	0.60965	0.49654

MUNICIPIO	COEFICIENTES 2008	
	2007	EXCEDENTES
59. Metapa	0.34592	0.15360
60. Mitontic	0.36019	0.10708
61. Montecristo de Guerrero	0.25086	0.15504
62. Motozintla	0.98714	1.00737
63. Nicolás Ruíz	0.28993	0.06631
64. Ocosingo	1.84287	3.07299
65. Ocoatepec	0.37460	0.10105
66. Ocozacoautla de Espinosa	1.13528	1.15912
67. Ostucán	0.54143	0.21132
68. Osumacinta	0.26642	0.05105
69. Oxchuc	0.58422	0.90823
70. Palenque	2.14904	1.63286
71. Pantelhó	0.42731	0.31724
72. Pantepec	0.37496	0.10527
73. Pichucalco	1.01736	0.45598
74. Pijijiapan	1.04061	0.70549
75. Porvenir, El	0.47267	0.19049
76. Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.53370	0.34988
77. Rayón	0.34645	0.10508
78. Reforma	1.00952	0.50127
79. Rosas, Las	0.56418	0.43422
80. Sabanilla	0.54177	0.47909
81. Salto de Agua	0.99573	0.75478
82. San Andrés Duraznal	0.13683	0.06632
83. San Cristóbal de las Casas	3.14855	3.49204
84. San Fernando	0.66269	0.39951
85. San Juan Cancuc	0.44012	0.40751
86. San Lucas	0.32564	0.11987
87. Santiago el Pinar	0.13205	0.20327
88. Siltepec	0.63233	0.49420
89. Simojovel	0.71041	0.51675
90. Sitalá	0.45156	0.23371
91. Socoltenango	0.46888	0.23749
92. Solosuchiapa	0.36181	0.07392
93. Soyaló	0.32297	0.21951
94. Suchiapa	0.47144	0.18565

MUNICIPIO	COEFICIENTES 2008	
	2007	EXCEDENTES
95. Suchiate	0.77908	0.48582
96. Sunuapa	0.31767	0.01824
97. Tapachula	7.72503	7.72573
98. Tapalapa	0.31644	0.04808
99. Tapilula	0.34787	0.12407
100. Tecpatán	0.69860	3.94681
101. Tenejapa	0.54912	0.80255
102. Teopisca	0.53718	0.38568
103. Tila	0.82390	1.74026
104. Tonalá	1.65937	1.38747
105. Totolapa	0.34412	0.11752
106. Trinitaria, La	1.09165	0.92012
107. Tumbalá	0.61359	0.44548
108. Tuxtla Chico	0.75452	0.53468
109. Tuxtla Gutiérrez	16.26745	26.09133
110. Tuzantán	0.55240	0.28810
111. Tzimol	0.45460	0.20354
112. Unión Juárez	0.39653	0.18391
113. Venustiano Carranza	1.00443	0.89890
114. Villa Comaltitlán	0.73080	0.39056
115. Villa Corzo	1.13004	0.91541
116. Villaflores	1.61675	1.43824
117. Yajalón	0.81832	0.50239
118. Zinacantán	0.51369	0.30539
TOTAL	100.00000	100.00000

Artículo Cuarto. Para la distribución y pago de las Participaciones Fiscales Federales por Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, participaciones del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel y de Impuestos Locales a la venta final de los bienes gravados con el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que corresponden a cada Municipio, se aplicará la siguiente tabla de coeficientes:

MUNICIPIO	COEFICIENTE 2008
1. Acacoyagua	-
2. Acala	-
3. Acapetahua	-
4. Aldama	0.45871
5. Altamirano	-
6. Amatán	1.64262
7. Amatenango de la Frontera	-
8. Amatenango del Valle	0.76371
9. Angel Albino Corzo	-
10. Arriaga	-
11. Bejucal de Ocampo	0.48336
12. Bella Vista	-
13. Benemérito de las Américas	1.03174
14. Berriozábal	-
15. Bochil	-
16. Bosque, El	1.06397
17. Cacahoatán	-
18. Catazajá	-
19. Cintalapa	-
20. Coapilla	-
21. Comitán de Domínguez	-
22. Concordia, La	2.81600
23. Copainalá	-
24. Chalchihuitán	1.22340
25. Chamula	5.70897
26. Chanal	0.72392
27. Chapultenango	-
28. Chenalhó	2.66187
29. Chiapa de Corzo	-
30. Chiapilla	-
31. Chicoasén	-
32. Chicomuselo	-
33. Chilón	8,92553
34. Escuintla	-
35. Francisco León	0.53017
36. Frontera Comalapa	-
37. Frontera Hidalgo	-

MUNICIPIO	COEFICIENTE 2008
38. Grandeza, La	-
39. Huehuetán	-
40. Huixtán	1.49014
41. Huitiupán	1.64370
42. Huixtla	-
43. Independencia, La	-
44. Ixhuatán	-
45. Ixtacomitán	-
46. Ixtapa	-
47. Ixtapangajoya	0.35515
48. Jiquipilas	-
49. Jitotol	-
50. Juárez	-
51. Larráinzar	1.41750
52. Libertad, La	-
53. Mapastepec	-
54. Maravilla Tenejapa	0.88186
55. Margaritas, Las	6.88907
56. Marqués de Comillas	0.65886
57. Mazapa de Madero	-
58. Mazatán	-
59. Metapa	-
60. Mitontic	0.75808
61. Montecristo de Guerrero	0.46007
62. Motozintla	-
63. Nicolás Ruíz	0.30484
64. Ocosingo	12.96864
65. Ocoatepec	0.87256
66. Ocozocoautla de Espinosa	-
67. Ostucán	1.15215
68. Osumacinta	-
69. Oxchuc	3.37360
70. Palenque	-
71. Pantelhó	1.81431
72. Pantepec	0.75184
73. Pichucalco	-
74. Pijijiapan	-

MUNICIPIO	COEFICIENTE 2008
75. Porvenir, El	0.89763
76. Villa Comaltitlán	-
77. Pueblo Nuevo Solistahuacán	2.03278
78. Rayón	-
79. Reforma	-
80. Rosas, Las	1.71567
81. Sabanilla	1.90428
82. Salto de Agua	4.54236
83. San Andrés Duraznal	0.25220
84. San Cristóbal de las Casas	-
85. San Juan Cancuc	2.13186
86. San Fernando	-
87. San Lucas	0.45640
88. Santiago el Pinar	0.26244
89. Siltepec	2.67350
90. Simojovel	2.45807
91. Sitalá	1.17677
92. Socoltenango	-
93. Solosuchiapa	-
94. Soyaló	-
95. Suchiapa	-
96. Suchiate	-
97. Sunuapa	-
98. Tapachula	-
99. Tapalapa	-
100. Tapilula	-
101. Tecpatán	-
102. Tenejapa	2.97217
103. Teopisca	2.31276
104. Tila	4.87033
105. Tonalá	-
106. Totolapa	0.45160
107. Trinitaria, La	-
108. Tumbalá	2.45281
109. Tuxtla Gutiérrez	-
110. Tuxtla Chico	-
111. Tuzantán	-

MUNICIPIO	COEFICIENTE 2008
112.Tzimol	-
113.Unión Juárez	-
114.Venustiano Carranza	-
115.Villa Corzo	-
116.Villaflores	-
117.Yajalón	-
118.Zinacantán	2.61003
TOTAL	100.00000

Artículo Tercero.- Se reforman los artículos; 171, 278, 278-A, 278-B, 422, 423, 425 y 433 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 171.- Son infracciones relacionadas...

I. A la VII...

VIII.- No realizar el canje de placas dentro del periodo establecido en el artículo 6 fracción IV de la Ley Estatal de Derechos.

Artículo 278.- El Fondo General Municipal...

$$P_{i,t} = P_{i,07} + \Delta FGM_{07,t} (0.8C1_{i,t} + 0.2C2_{i,t})$$

$$C1_{i,t} = \frac{\Delta IP_{i,t} n_i}{\sum_i \Delta IP_{i,t} n_i} \quad \text{con: } \Delta IP_{i,t} = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \frac{IP_{i,t,j}}{IP_{i,t,j-1}}$$

$$\text{donde: } IP_{i,t,j} = \frac{1}{2} (IP_{i,t,j} + IP_{i,t,j-1})$$

$$C2_{i,t} = \frac{PA_{i,t-1} n_i}{\sum_i PA_{i,t-1} n_i}$$

Donde:

$C_{1i, t}$, y $C_{2i, t}$, ...

$P_{i,t}$...

$P_{i, 07}$...

FGM_{07} ,

$IP_{i, t}$...

$PA_{i, t-1}$...

n_i , ...

... es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue.
 \sum_i

La fórmula...

Artículo 278-A.- El Fondo de Fomento Municipal...

$$F_{i,t} = F_{i,07} + \Delta FFM_{07,t} C_{i,t}$$

Con:

$$C_{i,t} = \frac{\frac{R_{i,t-1}}{R_{i,t-2}} n_i}{\sum_i \frac{R_{i,t-1}}{R_{i,t-2}} n_i}$$

Donde:

$C_{i, t}$...

$F_{i, t}$...

$F_{i, 07}$...

$\Delta FFM_{07, t}$...

$R_i, t-1$...

$R_i, t-2$...

n_i , ...

... es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue.
 \sum_i

La fórmula...

Artículo 278-B.- El Fondo Solidario Municipal se constituirá con las cantidades de las fracciones V, VI, VII, VIII y IX del artículo 277-A de esta ley y se distribuirá a los municipios conforme a la siguiente fórmula:

$$P_{i,t} = \frac{IM_{i,t} \cdot n_i}{\sum_i IM_{i,t} \cdot n_i}$$

Donde: **Con: $IM_{i,t} = I_{mi,t} + K$**

P_i, t ...

$IM_{i,t}$..

K ..

n_i ...

... es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación
 \sum_i de la variable que le sigue.

Los recursos...

En el caso...

Artículo 422.- Al Congreso...

- I. A la III ...
- IV. Autorizar la afectación del derecho y/o los ingresos de las participaciones federales del Estado o los Municipios, como garantía, fuente de pago o ambos de las obligaciones a su cargo, así como de igual forma la afectación del derecho y/o los ingresos provenientes de las participaciones estatales en el caso de los Municipios.
- V. A la VI...
- VII. Autorizar al Estado y a los Municipios la constitución de los mecanismos de fuente de pago, garantía o ambos a los que se afecten los ingresos y/o derechos a que se refiere este artículo, tales como fideicomisos, mandatos o cualquier otro medio legal que expresamente autorice el Congreso del Estado.
- VIII. ...

En los supuestos...

Artículo 423.- El Congreso del Estado, previa solicitud justificada del Gobernador del Estado, podrá autorizar montos de endeudamiento adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos, cuando a juicio del propio Congreso se presenten circunstancias extraordinarias que así lo exijan.

El Congreso podrá autorizar montos de endeudamiento adicionales al Estado y a los Municipios para inversiones públicas productivas, cuando a su juicio existan las circunstancias que lo ameriten y no rebasen su capacidad de endeudamiento.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, el Congreso del Estado podrá autorizar la emisión de valores, contratación de líneas de crédito globales o financiamientos en los cuales se determinen los montos máximos de endeudamiento para cada Municipio en la entidad y que se gestionen de manera conjunta por lo menos por dos de ellos, con la finalidad de que los Municipios que así lo deseen puedan incorporarse o adherirse con posterioridad al esquema autorizado. Dichas operaciones serán gestionadas con la asesoría de la Secretaría, siendo aplicable en lo conducente lo previsto en las fracciones VII y VIII del artículo 422 y la fracción XIX del 425.

Artículo 425.- Corresponde al Ejecutivo...

- I. A la IV. ...
- V. Afectar como fuente de pago, garantía o ambos de las obligaciones a su cargo, directamente o como avalista, el derecho y/o los ingresos a las participaciones federales, así como el derecho y/o el ingreso a las aportaciones federales que le correspondan al Estado, que sean susceptibles de afectación, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal.
- VI. Afectar o disponer en garantía de las obligaciones inscritas en el Registro a que se refiere este Código, y contraídas directamente por los Municipios, previa autorización del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, y de la instrumentación de los contratos respectivos, del derecho y/o los ingresos que les correspondan sobre participaciones federales o estatales.

VII. A la XVIII...

XIX. Promover esquemas de financiamiento para los Municipios y, en su caso, gestionar la autorización del Congreso del Estado de dichas operaciones, para su posterior aprobación por los Ayuntamientos de los Municipios que decidan adherirse a dichos esquemas.

Artículo 433.- Los empréstitos o financiamientos que contraten el Poder Ejecutivo y los Municipios del Estado, que constituyan deuda pública, así como las garantías que otorguen, deberán estar incluidos en los programas financieros estatales y municipales, salvo los casos previstos en las fracciones IV, V y VI del artículo 422, el artículo 423 y las demás excepciones establecidas en este Código.

Artículo Cuarto.- Se reforman los artículos; 6 y 33 de la Ley Estatal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 6.- Las dependencias...

Tratándose del pago de los derechos por servicios de control vehicular, éstos serán cubiertos de acuerdo a los siguientes periodos:

- I. Para el caso del refrendo anual de vehículos, el período de pago se establecerá en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas, vigente.
- II. En los casos que implique efectuar movimientos de baja y alta del vehículo, dentro de los 15 días siguientes a haberse efectuado dicha operación.
- III. En los demás casos, en el momento que la persona solicite la prestación del servicio.
- IV. Cuando en un ejercicio fiscal se disponga el nuevo canje total de placas, el periodo de pago se establecerá en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas, vigente.

Cuando se trate del pago de derechos por control vehicular, por la adquisición de vehículos nuevos, éste podrá ser cubierto por los contribuyentes en las agencias distribuidoras de automóviles que tengan celebrado Convenio de Prestación de Servicios para la Recepción y Cobro de Contribuciones Estatales y Federales en Materia Vehicular con la Secretaría.

Artículo 33.- La expedición de...

I. A la XL...

Tratándose de concesiones que favorezcan a más de un vehículo para la prestación del transporte público se pagarán los derechos por cada vehículo que ampare la concesión, en las respectivas modalidades.

Artículo Quinto.- Se reforman los artículos: 38 y 42 de la Ley Orgánica Municipal, para quedar como siguen:

Artículo 38.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:

- I. A la VIII ...
- IX. Autorizar al Presidente Municipal para que gestione y contrate empréstitos, créditos o financiamientos a cargo del Municipio, como deudor directo o avalista, así como la emisión de valores y otras operaciones financieras en términos de las disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables.
- X. A la LXIV...
- LXV. Autorizar al Presidente Municipal para que afecte los ingresos y/o el derecho a las participaciones y aportaciones federales susceptibles de afectación que correspondan al Municipio, como fuente de pago, garantía o ambos, de las obligaciones a su cargo, así como para que constituya o celebre los mecanismos de fuente de pago, garantía o ambos a los que se afecten dichas participaciones y aportaciones, tales como fideicomisos, mandatos o cualquier otro medio legal que expresamente autorice el Congreso del Estado, conforme a lo dispuesto en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
- LXVI. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales les asignen.

Artículo 42.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:

- I. A la XXXIX. ...
- XL. Celebrar, previa autorización del Ayuntamiento, los contratos y convenios para la obtención de empréstitos, créditos, emisión de valores y demás operaciones financieras previstas en las leyes hacendarias, suscribiendo los documentos o títulos de crédito requeridos para tales efectos, así como los contratos o actos jurídicos necesarios para constituir u operar los instrumentos y mecanismos a que se refiere el artículo 38, fracción LXV de esta Ley.

Para la formalización de dichas operaciones, los contratos, documentos y actos respectivos deberán estar suscritos, adicionalmente por el Tesorero y el Síndico Municipal.

- XLI. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales les asignen.

Artículo Sexto.- Se reforman los artículos: 1, 2, 3 y 128; Se adicionan los artículos 129 y 130, del Título Séptimo «Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal», de la Ley de Hacienda Municipal, para quedar como sigue:

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tienen por objeto regular la actividad hacendaria de los Municipios del Estado de Chiapas.

Artículo 2.- La hacienda pública de los Municipios del Estado de Chiapas se integra con los ingresos por concepto de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos participaciones federales, aportaciones federales, rendimientos de sus bienes, ingresos derivados de la

prestación de servicios públicos y los demás ingresos que tenga derecho a recibir en términos de la normatividad aplicable.

Artículo 3.- La ley...

Ninguna contribución podrá recaudarse si no está prevista en la Ley de Ingresos Municipal de cada Municipio o por una ley posterior que así lo establezca.

La ley de...

Los ingresos municipales deben destinarse a cubrir los gastos públicos. Sólo podrá afectarse un ingreso municipal a un fin específico, cuando así se autorice mediante ley o decreto.

Título Séptimo Ingresos Derivados De la Coordinación Fiscal

Artículo 128.- Las participaciones federales son las cantidades en efectivo que el Municipio tiene derecho a recibir en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por el Municipio, con la autorización del Congreso del Estado e inscritas en Registro de Obligaciones de Entidades y Municipios.

Artículo 129.- Son aportaciones federales las cantidades en efectivo que el Municipio tiene derecho a recibir en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, para destinarlas a los fines específicos a que se refiere dicho ordenamiento.

Artículo 130.- El Municipio recibirá las participaciones y aportaciones federales, y en general cualquier otro ingreso que tenga derecho a recibir derivado de la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes respectivas y los convenios de coordinación o colaboración y sus anexos que se suscriban para tales efectos.

Transitorios

Artículo Primerio.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero del 2008, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo Segundo.- Las reformas a los artículos 171, 278, 278-A, 278-B, 422, 423, 425 y 433 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; 38 y 42 de la Ley Orgánica Municipal, y 1, 2, 3 y 128, así como las adiciones de los artículos 129 y 130, el Título Séptimo «Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal», de la Ley de Hacienda Municipal, entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 27 días del mes de Diciembre de dos mil siete.- D. P. C. José Ángel Córdova Toledo.- D. S. C. Rafael Ceballos Cancino.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil siete.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Jorge Antonio Morales Messner, Secretario de Gobierno.- Rúbricas.

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 111

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 111

La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y

C o n s i d e r a n d o

Que la fracción I del artículo 29, de la Constitución Política Local, faculta al Honorable Congreso del Estado, legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a las Leyes Federales.

Como parte de las acciones y compromisos del Ejecutivo Estatal, está el crear un marco de legalidad que fortalezca las Instituciones de la Administración Pública, adecuándolas a la cambiante dinámica social en la que está inmersa la realidad del Estado, para que sean acordes a las necesidades que el pueblo de Chiapas demanda.

En este orden de ideas, como respuesta a las necesidades de la población del Estado, se hace imperativo para el Gobierno satisfacer las necesidades de vivienda, previendo el crecimiento ordenado de las ciudades para generar un desarrollo social armonioso.

La vivienda constituye la base del patrimonio familiar y es el centro de la convivencia y desarrollo social. Una vivienda de calidad, con certidumbre jurídica sobre su propiedad, permite a las familias

generar estabilidad económica y social, tanto para las generaciones actuales, como para las futuras. La política de vivienda debe tener un sentido preponderantemente social y buscar, en todo momento, ampliar el acceso de las familias más necesitadas de la Entidad a viviendas dignas.

La situación actual del Estado en materia de vivienda con servicios básicos para la salud de la población, se encuentra por debajo de la media nacional, por lo que es un reto para el Estado y a su vez un espacio de oportunidad para impulsar la construcción de viviendas seguras y de bajo costo, con materiales de la región para beneficiar a un mayor número de habitantes; asimismo, es un fuste atractivo económico para desarrollar, apoyar y en su caso traer nuevas inversiones para empresas generadoras de materias primas para la construcción que fomenten el desarrollo sustentable de la región a través de la generación de empleos.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien emitir el siguiente:

Decreto que Autoriza al Ejecutivo del Estado, la Constitución de un Fideicomiso Público que tendrá por Objeto la Promoción y Fomento Integral de la Vivienda

Artículo 1.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, la creación de un fideicomiso público, sectorizado a la Secretaría de Finanzas, para la promoción y fomento integral de la vivienda, minimizando los riesgos que amenazan la protección de vidas humanas.

Artículo 2.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para aportar el 100% (cien por ciento), del patrimonio fideicomitado, para la constitución del fideicomiso a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- El fideicomiso cuya creación se autoriza, tendrá como objeto, ser un instrumento de captación, manejo aplicación, distribución, administración de recursos, que permita al fideicomitente, el control de las inversiones de los recursos con los que se constituya el patrimonio fideicomitado y su destino final, que será la promoción y fomento integral de la vivienda, minimizando los riesgos que amenazan la protección de vidas humanas.

Artículo 4.- La constitución del fideicomiso a que se refiere el artículo anterior, se formalizará de conformidad con la legislación aplicable y, su duración será la necesaria para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 5.- El contrato de fideicomiso, indicará la constitución, origen y destino del patrimonio fideicomitado, en dicho contrato se establecerán las características del fideicomiso, con sujeción a las leyes aplicables y a este Decreto.

Artículo 6.- El domicilio legal del fideicomiso será la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no obstante y cuando ésta pueda establecer oficinas, sucursales o agencias, en cualquier parte de la República Mexicana y el extranjero.

Artículo 7.- El órgano de Administración del Fideicomiso, lo será el Consejo de Administración y la Dirección General.

Artículo 8.- Es facultad del Ejecutivo del Estado, nombrar a los integrantes del Consejo de Administración, y al Director General teniendo facultades para vetar los acuerdos del propio Consejo de administración.

Artículo 9.- El fideicomiso, para la cual se autoriza la creación por este Decreto, estará sectorizada a la Secretaría de Finanzas.

Artículo 10.- Corresponderá a la Secretaría de Finanzas, establecer políticas de desarrollo del fideicomiso que se autoriza crear; coordinar su programación y presupuestación, de conformidad con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas; conocer su operación y evaluación; así como promover la generación de fondos propios y las demás atribuciones que le confieran los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 11.- Una vez formalizado el contrato de fideicomiso, deberá inscribirse en el Registro de la Administración Pública Paraestatal correspondiente.

Artículo 12.- La Contraloría General del Estado, determinará los instrumentos de control del fideicomiso, en términos de las leyes aplicables.

T r a n s i t o r i o

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los días 27 del mes de diciembre del año dos mil siete.- D. P. Dip. José Ángel Córdova Toledo.- D. S. Dip. Rafael Ceballos Cancino.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil siete.

Juan Sabinés Guerrero, Gobernador del Estado.- Jorge Antonio Morales Messner, Secretario de Gobierno.- Rúbricas.



Periódico Oficial

DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CHIAPAS

DIRECTORIO

JORGE ANTONIO MORALES MESSNER
SECRETARIO DE GOBIERNO
Y
DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL

CARLOS TOVILLA PADILLA
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

MANUEL DE JESUS ORTIZ SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNACION

VICENTE ANTONIO MORALES AHUMADA
JEFE DE LA OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES

DOMICILIO: PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO
AV. CENTRAL ORIENTE
COLONIA CENTRO, C.P. 29000
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

periodicof@secgobierno.chiapas.gob.mx
TEL.: (961) 6 - 13 - 21 - 56



IMPRESO EN:
TALLERES GRAFICOS